

Democratización



Año 7, Número 36

Pensar en modelos políticos y económicos

Roberto Casanova

De milicos a capos: el narcotráfico
como enemigo de la democracia
en América Latina

Democratización

Ayuda Humanitaria en Venezuela:
del asistencialismo a la generación
de capacidades

Samuel Díaz

La importancia de la institucionalidad
en el desarrollo económico

Asdrúbal Oliveros, Jesus Palácios Chacín

Crisis económica y el colapso
del acervo de capital humano
venezolano

Omar Zambrano

Democratización

2025

Año 7, Número 36

Pensar en modelos políticos y económicos

Roberto Casanova

De milicos a capos: el narcotráfico
como enemigo de la democracia
en América Latina

Democratización

Ayuda Humanitaria en Venezuela:
del asistencialismo a la generación
de capacidades

Samuel Díaz

La importancia de la institucionalidad
en el desarrollo económico

Asdrúbal Oliveros,
Jesus Palácios Chacín

Crisis económica y el colapso
del acervo de capital humano
venezolano

Omar Zambrano

Pensar en modelos políticos y económicos

Roberto Casanova

1. Introducción

Vivimos en una época repleta de paradojas. Una de ellas, especialmente relevante, radica en que, por un lado, nos enfrentamos a problemas complejos cuyas soluciones son principalmente políticas; por otro lado, el nivel del debate público es preocupantemente bajo. En este contexto, debemos esforzarnos, entre otras cosas, por trazar tres imágenes, aunque sea de manera aproximada: la de la sociedad a la que pertenecemos, la de aquella en la que podríamos convertirnos y la de la que deseamos formar parte. Esta tarea es imprescindible para revitalizar la política en tiempos en los que están en juego la libertad, la paz y el bienestar. Con el propósito de contribuir a esta labor, en este ensayo me permito ofrecer al debate, de manera muy esquemática, cuatro modelos económicos y políticos que considero útiles como herramientas analíticas.

Es importante destacar, ante todo, que un modelo es una construcción teórica que nos ayuda a identificar los mecanismos causales más relevantes presentes en la porción de la realidad que estamos tratando de comprender. Podemos pensar en un modelo como un guion que nos permite narrar una historia plausible y comprensible sobre el objeto de nuestro estudio. Sin embargo, debemos ser cautelosos y no confundir la representación teórica con la realidad misma. Un modelo debe utilizarse siempre con

precaución y no aplicarse mecánicamente al análisis de hechos y procesos reales, evitando forzar que estos encajen en él.

En este ensayo, presento cuatro modelos derivados de la consideración de dos pares fundamentales de categorías para analizar la realidad política y económica. Por un lado, tenemos la dicotomía entre *autocracia* vs. *democracia*, y por otro, la tensión entre proceso de *mercado* vs. *intervencionismo*. Aunque el significado de estas nociones puede debatirse, en este texto es suficiente con que nos quedemos con su uso más general, que refleja la mayor o menor concentración del poder político en el primer caso y el mayor o menor grado de libertad en la esfera económica en el segundo. El cruce de estas categorías genera cuatro ámbitos de posibilidades, dentro de los cuales esquematizo los siguientes modelos: *autocrático patrimonialista*, *autocrático de mercado*, *democrático interventor* y *liberal popular*. Un gráfico resume esta propuesta teórica.

Cuatro modelos políticos y económicos		
	Autocracia	Democracia
Intervencionismo	Autocrático patrimonialista	Democrático interventor
Proceso de mercado	Autocrático de mercado	Liberal popular

Cada uno de estos modelos posee una lógica interna, lógica que se manifiesta a través de estructuras que incentivan o desincentivan ciertos comportamientos y de mecanismos causales específicos. Aunque no son, desde luego, los únicos modelos posibles, resultan especialmente útiles, en mi opinión, para comprender nuestra realidad actual, identificar nuestras posibilidades futuras y orientar estratégicamente nuestra acción política.

2. El modelo autocrático patrimonialista

Este modelo se basa en la toma del poder estatal por parte de una minoría ambiciosa y decidida. Esta captura puede ocurrir de diversas maneras, aunque en los tiempos actuales, el surgimiento de fenómenos populistas es especialmente relevante. El líder populista accede al poder a través de elecciones, aprovechando una crisis de representatividad política, y se esfuerza por centralizarlo en sí mismo y en los grupos que lo respaldan. Entre estos grupos, destaca una parte de la fuerza armada y de la policía, ya que un régimen autoritario –que, aunque no lo diga abiertamente, niega la alternancia en el poder– debe estar preparados para enfrentar, incluso mediante el uso de la fuerza, a cualquier adversario, por pacífico y democrático que sea.

En estas circunstancias, la minoría en el poder puede administrar de manera discrecional los recursos y los instrumentos estatales. En la versión estatista y socialista del modelo, busca subordinar el sistema económico a los planes y controles gubernamentales. Esto se materializa mediante una amplia legislación intervencionista que crea oportunidades para la corrupción y los privilegios, al mismo tiempo que causa diversas distorsiones en el proceso de mercado. Para quienes ostentan el poder, la línea entre el patrimonio estatal y sus ingresos personales tiende a difuminarse, lo que justifica el término “patrimonialista”. Este proceso de apropiación, respaldado por el Estado, puede incluso extenderse a patrimonios privados a través de la perversión del concepto de expropiación, que en realidad se convierte en una forma de exproliación.

Estamos pues ante un sector autocrático, civil y militar, que lleva a cabo una acumulación originaria de capital y que gra-

dualmente se convierte en una nueva clase social privilegiada. A pesar de ello, el régimen, si aspira a mantener cierta legitimidad, no puede ser totalmente indiferente al apoyo o rechazo de diversos sectores sociales, especialmente de los sectores populares. Por tanto, debe contar con mecanismos clientelares que, si es necesario, se conviertan en instrumentos de chantaje para garantizar la obediencia.

La debilidad inherente al modelo radica en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, encontramos la insaciable ambición de la minoría dominante y de aquellos “enchufados” que aprovechan las oportunidades generadas por el intervencionismo estatal. Por otro lado, está la destrucción de los incentivos para la función empresarial y la creación de riqueza. Todo ello se manifiesta especialmente en un déficit fiscal crónico, resultado del aumento del gasto público (impulsado por la visión estatista de la economía y la corrupción desmedida) y los bajos ingresos fiscales (reflejo de una economía débil e improductiva). El endeudamiento y el financiamiento monetario, que se traduce en el corrosivo impuesto inflacionario, son opciones disponibles para el régimen, aunque no son sostenibles en el tiempo. En última instancia, este modelo tiende inexorablemente a generar incremento de precios, escasez, desempleo y empobrecimiento, lo que provoca una creciente frustración y descontento social.

La respuesta del régimen ante esa deriva económica y social será, en consonancia con su naturaleza, la represión y su progresiva transformación en un aparato policial. Esto, a su vez, significará la definitiva pérdida de su legitimidad. El ordenamiento, por así decirlo, del saqueo de las arcas públicas se hará forzoso, impulsando algún tipo de purga y desatando conflictos distributivos, desconfianza y deserciones dentro de la minoría patri-

monialista. Esta minoría o una parte de ella, convertida en una oligarquía corrupta y ostentosa, podrá ejercer su dominio durante algún tiempo más sobre una población diezmada, empobrecida y desperdigada. Sin embargo, el modelo está destinado casi irremisiblemente al colapso por su propia lógica, y su transformación en otro modelo, como el autocrático de mercado, es previsible. Especialmente porque a una parte de la minoría dominante le resultará lo más conveniente.

3. El modelo autocrático de mercado

Este modelo fusiona el ejercicio autoritario del poder estatal por parte de una minoría dominante con una economía de mercado basada en la propiedad privada. La principal fuente de riqueza para quienes ostentan el poder no proviene de la apropiación de recursos públicos, sino de su participación en actividades empresariales bajo condiciones favorables que ellos mismos pueden garantizarse. Esto es especialmente cierto si esa minoría, tanto en su componente civil como en el militar, cuenta con un capital que haya podido acumular, por ejemplo, en el marco de una dinámica patrimonialista previa. En este sentido, por mencionar una posibilidad, un proceso amañado de privatización de empresas estatales puede ser una vía para que la minoría poderosa y sus allegados se inserten convenientemente en la dinámica empresarial.

Aunque en este modelo el proceso de mercado tiende a ser libre, el carácter autocrático del régimen facilita la implementación de políticas intervencionistas en favor de algunos sectores influyentes, como, por ejemplo, medidas proteccionistas frente a la competencia extranjera. Dado que se trata de una autocracia, el Estado de derecho no existe en forma cabal, y la discrecionalidad

dad en el ejercicio del poder está omnipresente. Por lo tanto, los inversores privados suelen formar parte de la minoría dominante o, en el mejor de los casos, no deben ser percibidos por ella como una amenaza para su poder. No obstante, esto no elimina el riesgo de acciones arbitrarias que vulneren los derechos de propiedad. La minoría autocrática siempre puede apropiarse del patrimonio de otros, especialmente si sus expectativas de permanencia en el poder se ven amenazadas o acortadas.

En cualquier caso, si esa minoría decide abstenerse de saquear las finanzas públicas o limitar dicho saqueo, el modelo autocrático de mercado podría ofrecer cierta estabilidad fiscal y macroeconómica. Además, gracias a la existencia de una dinámica empresarial más o menos activa, la economía podría experimentar crecimiento, generando empleos y mejorando las condiciones de vida en general. Sin embargo, la subordinación de la actividad empresarial a la minoría autocrática actúa como un obstáculo que restringirá la entrada de inversores y, por ende, limitará el crecimiento.

La estabilidad del modelo enfrenta diversos problemas políticos. La ausencia de reglas democráticas convierte la sucesión del líder gobernante en un tema delicado que puede desencadenar conflictos dentro de la élite autocrática. Además, las relaciones comerciales y financieras internacionales con países democráticos pueden verse afectadas negativamente. Las posibles demandas de democratización por parte de una sociedad más próspera y dinámica también podrían ejercer presión sobre el régimen, generando dificultades políticas con consecuencias económicas y sociales. En última instancia, el modelo es inestable debido a la contradicción inherente entre la libertad económica y la dominación política.

4. El modelo democrático interventor

Este modelo parte de la premisa de que la democracia es la mejor manera de resolver los problemas colectivos, especialmente la cuestión de quién debe gobernar. En este régimen político, quienes aspiran a ejercer la representación pública compiten por el apoyo electoral de la mayoría y para aspirar al éxito a menudo necesitan contar con el respaldo de grupos económica y socialmente poderosos.

En este caso, se respetan los derechos de propiedad, aunque no de manera absoluta. A la propiedad se le asigna una imprecisa función social, lo que puede manifestarse en diversas regulaciones que limitan su uso, usufructo y disposición. Además, aunque se asume que la dinámica del mercado es necesaria para garantizar el funcionamiento de una economía moderna, también se le atribuye la generación de diversos problemas que requieren la intervención del Estado. Uno de estos problemas es la desigualdad, lo que justifica el énfasis redistributivo de las políticas públicas y la estructura fiscal característica de este modelo.

En principio, este modelo podría generar un “círculo virtuoso” de crecimiento económico: aumento del gasto público, incremento del ingreso, mayor capacidad de consumo, creación de oportunidades empresariales, aumento de la inversión privada, crecimiento de la producción, expansión de las fuentes de empleo, recaudación fiscal más alta y nueva expansión del gasto público. Sin embargo, esta dinámica de expansión, impulsada en gran medida por el gasto público, tiene límites.

La competencia entre actores políticos y su disposición a intervenir activamente en el proceso económico, junto con las

demandas de apoyo estatal de diversos grupos y sectores, resulta en un creciente y tupido entramado de leyes, reglamentos y políticas. La imagen de un Estado con innumerables “tomacorrientes” que permite la proliferación de la práctica del “enchufe” ilustra este punto. Esta proliferación de intervenciones va entorpeciendo progresivamente la actividad empresarial genuina, que se vuelve menos atractiva en comparación con la alternativa de capturar renta mediante el acceso a los centros de decisión estatal. Como resultado, el gasto público y la intervención estatal siguen expandiéndose, ya no solo por razones de estrategia económica y social, sino como expresión de un Estado capturado por grupos y sectores, incluida una vasta burocracia.

El Estado se enfrenta así a un problema cada vez más grave de financiamiento, y el déficit fiscal se vuelve estructural. Aunque el endeudamiento proporcione un margen de maniobra al gobierno, tarde o temprano se requerirá un ajuste que implicará la disminución del gasto público y el aumento de la presión tributaria sobre la actividad económica. Esto, a su vez, desestimulará la inversión privada y generará descontento en diversos sectores. Una opción para obtener ingresos sería la emisión monetaria, pero la inflación resultante tendría efectos distributivos perniciosos, empobreciendo a amplios sectores de la población. Los ajustes fiscales también afectarán de manera disímil a distintos sectores y, en última instancia, el Estado se convertirá en una fuente de desigualdades.

Las expectativas sociales sobre la capacidad del Estado para garantizar el bienestar se verán pues cuestionadas, y la legitimidad de los actores políticos y del propio sistema democrático se erosionará. Esto podría abrir paso a un fenómeno populista de uno u otro signo. El quiebre del modelo, al menos en lo que respecta a su carácter democrático, se tornará altamente probable.

5. El modelo liberal popular

El modelo liberal popular considera la libertad como el fundamento del orden social. En consecuencia, establece límites al poder en todas sus formas. En primer lugar, aunque el Estado debe ser fuerte, también debe estar restringido en su alcance y en la gestión de los recursos públicos. Su objetivo principal debe ser garantizar un marco de justicia en el que el respeto a la libertad y los derechos de propiedad sea fundamental. En segundo lugar, los representantes públicos deben ser electos democráticamente y estar sometidos a sistemas eficaces de gestión transparente y rendición de cuentas. Y, en tercer lugar, la actividad empresarial debe ser libre y no estar sujeta a intervenciones arbitrarias por parte del Estado, aunque debe seguir reglas que eviten prácticas monopolísticas y protejan los derechos de los usuarios y consumidores.

En este modelo, la solidaridad es también un valor esencial. Se manifiesta, sobre todo, a través de una política social subsidaria que se enfoca en el desarrollo de las capacidades individuales. Esto permite que las personas asuman la responsabilidad de sus proyectos de vida libremente elegidos. Así, se logra la armonía entre un marco de justicia que respeta la dignidad humana y una dinámica económica basada en la competencia y la innovación.

Para que este modelo funcione, es crucial enfocarse menos en redistribuir la riqueza y más en aumentar la productividad. Solo una economía que crezca sostenidamente gracias al incremento de la productividad podrá garantizar la expansión de los ingresos (tanto ganancias como salarios) y la recaudación de impuestos para financiar un Estado promotor, pero no intervencionista.

La existencia de un Estado limitado, aunque no mínimo, implica el manejo disciplinado de las finanzas estatales y de la moneda. Los límites al gasto y al endeudamiento público, así como la autonomía del banco central, son componentes esenciales de este modelo. Por otro lado, resulta crucial evitar que grupos de interés y actores políticos moldeen leyes y políticas públicas en su propio beneficio, perjudicando así el interés general. En ese sentido, la competencia política dentro del marco de un Estado limitado dificulta la concentración del poder político, lo que a su vez obstaculiza su uso por parte de los actores económicos para eludir la competencia mediante la obtención de privilegios. Además, podría argumentarse que la competencia, al dificultar la concentración del poder económico, reduce el riesgo de que grupos de interés influyan exageradamente en el proceso político. En última instancia, todo esto contribuye a preservar la estabilidad económica y el carácter justo de las instituciones.

Este modelo también enfatiza que la mera existencia de instituciones formales no garantiza la sostenibilidad de un orden liberal y democrático. Su viabilidad depende, en última instancia, del respaldo popular. Esto implica tres aspectos clave: valores y prácticas liberales arraigados en una parte significativa de la ciudadanía, iniciativas civiles independientes del Estado y destinadas a abordar problemas colectivos solidariamente, y la disposición de los ciudadanos a movilizarse en defensa de la justicia. Es relevante destacar que el “pueblo” al que se refiere este modelo no es una masa de individuos indiferenciados y atomizados, sino un pueblo político: una pluralidad de ciudadanos conscientes de su condición de comunidad política e histórica, dispuestos a unirse en defensa de una concepción compartida de justicia. No se trata solo de un asunto de moral pública, aclaro, ya que un orden de instituciones

justas es, en realidad, un marco imprescindible para el progreso de la mayoría de las personas consideradas individualmente.

La principal debilidad de este modelo radica en que es más sencillo para grupos pequeños resolver sus problemas de acción colectiva para satisfacer sus intereses particulares que para vastos sectores de la ciudadanía defender el interés general. Aunque ciertas coyunturas históricas, como la caída de una tiranía, pueden ser oportunidades para el surgimiento del pueblo en el sentido antes comentado, el desafío consiste en que ese pueblo se movilice cada vez que la libertad y la justicia estén amenazadas. En este contexto, es casi innecesario subrayar la importancia que tiene la existencia de líderes genuinamente comprometidos con la creación de un orden liberal sustentado en el apoyo popular.

6. Comentarios adicionales

Estos son los cuatro modelos políticos y económicos que, en breve síntesis, presento para la reflexión. Sin embargo, podríamos imaginar otros enfoques. Por ejemplo, modelos híbridos que resulten de combinar aspectos de dos o más de los modelos anteriores. También podríamos abordar modelos más complejos, que incluyan aspectos no tratados aquí, como la cultura, la distribución de la riqueza o la dinámica territorial. Otra línea de investigación interesante sería delinear los mecanismos mediante los cuales un modelo podría transformarse en otro. No obstante, en este ensayo, me he limitado a presentar los cuatro modelos mencionados, considerándolos herramientas teóricas más que descripciones de una realidad particular.

Quiero enfatizar que, en las ciencias sociales e históricas, el verdadero desafío intelectual radica en comprender la realidad,

no en validar modelos teóricos. No debemos pretender encontrar el modelo al que una realidad específica correspondería. En cambio, debemos evaluar qué modelo o combinación de modelos nos permite narrar una historia razonable sobre las circunstancias que estamos estudiando, incluso considerando la posibilidad de que ninguno de esos modelos sea completamente satisfactorio. Los modelos teóricos son, insisto, herramientas para comprender la realidad. Son tanto necesarios como insuficientes, ya que no podemos abordar la infinita complejidad de la realidad sin recurrir a las simplificaciones que los modelos nos ofrecen.

En cualquier caso, no hace falta ser muy perspicaz para advertir la utilidad que tiene cada uno de los modelos anteriores para interpretar algún período particular del devenir histórico venezolano contemporáneo. Por ejemplo, el modelo autocrático patriomonal nos ayuda a entender, en líneas generales, el orden que surgió con la revolución chavista-madurista. De manera similar, el modelo autocrático de mercado esboza un posible camino para esa revolución, un camino que algunos actores políticos y empresariales habrían intentado transitar, hasta ahora sin éxito. Estos dos modelos nos ayudarían así a describir algunas contradicciones dentro del régimen dominante.

Por otro lado, el modelo democrático interventor no solo nos permite entender la realidad previa a la revolución chavista, sino también lo que podría surgir cuando el régimen autocrático actual llegue a su fin. El modelo liberal popular, en fin, esboza el funcionamiento de un orden político y económico que se ha vuelto posible después de los destructivos años de revolución socialista. Por ahora, prefigura una realidad deseable y sirve como referencia para una acción política transformadora. Las diferencias y coincidencias entre este modelo y el modelo democrático interventor

serán tema central, espero, en el debate público que renacerá con nuestra democracia.

Sin embargo, el análisis de la realidad venezolana y de las posibilidades presentes en ella, considerando los modelos mostrados, queda como tema para otro ensayo.

De milicos a capos: el narcotráfico como enemigo de la democracia en América Latina

Democratización

*“El fenómeno del narcotráfico es una
de las amenazas más terribles que existen
contra la libertad y la justicia en el mundo”*

Luis Carlos Galán Sarmiento

El 30 de abril del año 1984, la República de Colombia recibiría una noticia que marcaría un antes y un después en su sistema político y que generaría un cambio social en el país y en todo el continente.

Esa noche la historia se partió en dos, el Ministro de Interior fue asesinado¹ por órdenes de un cartel de la droga, dando inicio a un nuevo fenómeno dentro de la sociedad: la guerra de los carteles de la droga y el Estado².

1 Jimmy Nomesqui Rivera, “La muerte de Rodrigo Lara, 40 años del magnicidio por el que comenzó la guerra contra el narcotráfico en Colombia”, *Infobae*, 30 de abril, 2024, <https://www.infobae.com/colombia/2024/04/30/la-muerte-de-rodrigo-lara-40-anos-del-magnicidio-por-el-que-comenzo-la-guerra-contra-el-narcotrafico-en-colombia/>

2 “Guerra contra el Estado: extradición y sometimiento de los narcos, Relato histórico del conflicto armado interno en Colombia”, Comisión de la

Por primera vez en la historia de América Latina, la guerra no era entre ejércitos regulares o grupos guerrilleros. Las organizaciones criminales habían decidido desafiar al Estado con el único fin de arrodillarlo e instaurar una *narcocracia* en el país. El medio para conseguirlo era “la plata o el plomo”, frase atribuida a Pablo Escobar. La corrupción era un mecanismo de disuasión para penetrar a todas las instituciones del Estado y subordinarse al poderío de los carteles. Junto a la violencia buscaba doblegar, mediante el miedo, a quien por razones éticas y morales no aceptara el soborno de los criminales.

Esto generó una atmósfera de corrupción y violencia que permeó en América Latina. La situación política, económica y social de nuestro continente fue el perfecto caldo de cultivo para la instauración del narcotráfico como nueva forma de ascenso económico y social en nuestro continente. Con el paso de los años, esto ha evolucionado y los carteles de la droga han mutado de ser simples financistas dentro del sistema político, a ser una nueva élite política que toma decisiones sobre el rumbo de los países donde tienen influencia.

Durante años hemos visto cómo la democracia pierde peso a nivel mundial y se hace presente el anhelado “fin de la historia”, nunciado por Francis Fukuyama³, en donde el fin de la Guerra Fría y la derrota del comunismo lograrían la ola democratizadora. Y, así se establecería la democracia liberal como el modelo más tilizado en el mundo. Esto generó una excesiva confianza entre

verdad, <https://www.comisiondelaverdad.co/guerra-contra-el-estado-extradicion-y-sometimiento-de-los-narcos>

3 Francis Fukuyama, *El Fin de la Historia y el Último Hombre: La Interpretación más Audaz y Brillante de la Historia Presente y Futura de la Humanidad*, Editorial Planeta, Barcelona, 1993.

las élites políticas y económicas y, por consiguiente, un deterioro sistemático de la democracia como la forma de gobierno ideal para el ciudadano del siglo XXI. Las organizaciones políticas pasaron a ser meras maquinarias electorales: dejaron de responder a las demandas del ciudadano y, junto a la llegada de un mundo más globalizado, el discurso político fue banalizado, cambiando ideas por votos y trabajo real por likes en redes sociales.

Todo lo anterior ha generado una ola de autocracias que se diferencian de manera muy clara de las viejas dictaduras del siglo XX, tanto en América Latina como en Europa. Éstas parten de una apariencia democrática, mostrando la capacidad de celebrar algunas elecciones, la existencia de organizaciones políticas de oposición y ciertas libertades limitadas, como la libertad de expresión. Creando, de esta manera, la fachada democrática donde realmente se consolidan las autocracias en las que, mediante la vulneración de las instituciones, pervierten el sistema, dando paso a una dictadura perfecta, mucho más sofisticada y, en algunos casos, alcanzando altos niveles de aprobación debido a la polarización intencional, a través del discurso de *buenos vs. malos* o la “teoría de amigos y enemigos”, de Carl Schmitt⁴, que refiere a “si no estás conmigo eres un enemigo de la patria” y no un adversario más, como en una democracia normal.

En este contexto, hemos visto el surgimiento de dos grandes fenómenos que afectan el mundo occidental: el terrorismo y el narcotráfico. Cada uno actuando desde la sombra y colándose desde los aspectos más irrelevantes para las sociedades occiden-

4 María Concepción Delgado Parra, “El criterio amigo-enemigo en Carl Schmitt. El concepto de lo político como una noción ubicua y desterritorializada”, *Cuaderno de Materiales*, Revista de Filosofía, N° 23, 2011, <https://www.filosofia.net/materiales/pdf23/CDM11.pdf>

tales: la cultura, la educación y las redes sociales. Asimismo y de manera agravada, aprovechándose de las fallas que se presentan en el sistema, como la corrupción de las élites gobernantes, los grandes problemas de desigualdad, la pobreza, la crisis económica y la crisis institucional. En donde la corrupción se ha vuelto sistémica, especialmente en las ramas judiciales y de seguridad, en las que los bajos sueldos y la falta de formación han generado que las fuerzas de orden público sean las organizaciones con mayor desconfianza dentro de la sociedad.

Según el Latinobarómetro⁵, los países con mayor nivel de aceptación policial en el año 2023, fueron Chile, Uruguay y Colombia. Por otro lado, naciones como México, El Salvador y Venezuela (países donde el estado de derecho no existe, considerados por algunos expertos como estados fallidos y, donde sólo México puede considerarse una democracia, aunque con altos índices de corrupción, desigualdad y abusos de poder) se caracterizaron por la baja confianza de la ciudadanía en sus cuerpos policiales.

En un continente donde la mayoría de sus países tienen estados tan débiles y un sistema político plagado de corruptelas, las organizaciones criminales ven una oportunidad de penetrar en el Estado para satisfacer sus intereses. Paola Bautista de Alemán, política y académica venezolana, hace un interesante análisis de cómo estas organizaciones se han consolidado y debilitan a la democracia. Si bien en el siglo XX la guerra entre los carteles o frente al Estado era el espacio donde se movían u operaban, en el siglo XXI este fenómeno ha evolucionado. La crisis política ha

5 Juan Manuel Caicedo, "Autoridad y privilegio: confianza en la policía en Latinoamérica", *Revistas Uniandes*, 1 de abril de 2022, No. 110, <https://revistas.uniandes.edu.co/index.php/colombia-int/article/view/2983/1763>

generado que muchos estados en América Latina vayan rumbo a ser estados fallidos⁶.

En este análisis podemos visualizar cómo la ausencia de Estado es el caldo de cultivo perfecto para la consolidación de organizaciones criminales. Pues un Estado que no sea capaz de garantizar el control y la seguridad de su propio territorio, donde los niveles de desigualdad se incrementan, hay aumentos considerables en la corrupción administrativa y debilitamiento de los mecanismos de elección popular; deriva en que las organizaciones criminales usurpan su función.

Un claro ejemplo de ello es la pérdida de territorio por parte del estado colombiano en los años 90⁷. La gran mayoría de las vías de transporte terrestre, carreteras y autopistas fueron secuestradas por varios frentes de la organización narcoterrorista FARC EP. Las denominadas pescas milagrosas⁸ muestran cómo estas organizaciones son capaces de, a través de la violencia, adueñarse de espacios geográficos importantes, aunque el avance de estas bandas criminales no es exclusivo del plano territorial.

La principal estrategia de estas bandas en el siglo XXI ha sido penetrar en las instituciones del Estado. Ya los mecanismos de amenazas y sobornos no son la única estrategia para contro-

6 Rodrigo Castellanos, “¿Qué es un Estado fallido?”, *El Orden Mundial*, 17 de noviembre de 2020, <https://elordenmundial.com/que-es-estado-fallido/>

7 Luis Javier Orjuela Escobar, “El Estado Colombiano en los Noventa: Entre la Legitimidad y la Eficiencia”, *Revistas Uniandes*, <https://revistas.uniandes.edu.co/index.php/res/article/download/5060/4868/23173>

8 Javier Alexander Macías, “«Pescas milagrosas»: así funcionó la estrategia que financió a las Farc”, *El Colombiano*, 08 de mayo de 2021, <https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/asi-funcionaban-las-pescas-milagrosas-de-las-farc-FE15007534>

lar a unos pocos funcionarios que hiciesen de la vista gorda ante sus crímenes. Estas organizaciones evolucionaron de tal manera que han penetrado en instituciones por completo y, poco a poco, han ido transformando estos estados fallidos en lo que Bautista ha denominado “Estados Gansteriles”⁹. El objetivo de estas organizaciones no solo es el beneficio económico de una actividad delictiva, sino un mayor control del poder político para hacer más lucrativo su negocio y obtener el control total del Estado.

Esta nueva forma de ejercicio de la política donde la violencia, la corrupción y el control social permiten la consolidación de criminales en el poder se puede palpar en varios países de América Latina, siendo los más notorios México, Colombia y Venezuela. En el norte de México vemos cómo los carteles tienen el control total de municipios, en ejemplos puntuales como cuando las fuerzas de seguridad capturan a un capo de la droga y las milicias de este cartel hacen una revuelta tan grande que obligan al Estado a liberar al capturado¹⁰. A su vez, en algunos municipios fronterizos de Colombia y Venezuela, las monedas de sus países no tienen ningún valor y, en algunos establecimientos comerciales como pequeños abastos, las compras se realizan con material de contrabando, como: drogas, oro, gasolina y gasoil¹¹. Explicando que, los

9 Paola Bautista de Alemán, “Tres rasgos del Estado gangsteril en Venezuela”, *Forma*, 28 de julio de 2023, <https://red-forma.com/edicion-2/tres-rasgos-del-estado-gangsteril-en-venezuela-paola-bautista-de-aleman/>

10 Abdiel Sepúlveda, “Ovidio Guzmán: La captura y liberación del hijo de «El Chapo», raíz del primer Culiacanazo”, *El Universal*, 30 de agosto de 2024, <https://www.eluniversal.com.mx/tendencias/ovidio-guzman-la-captura-y-liberacion-del-hijo-de-el-chapo-raiz-del-primer-culiacanazo/>

11 Daniel Pardo, “Qué hay detrás del insólito auge de estaciones de gasolina en Cúcuta, la ciudad colombiana fronteriza con Venezuela”, *BBC Mundo*, 7 de noviembre de 2022, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63323077>

alcaldes o no tienen ningún tipo de autoridad, o los que resultan electos han sido designados por voluntad de estos grupos irregulares, obligando a la población a votar por los candidatos que disponga la organización.

Pero, ¿cómo se logran estos niveles de obediencia en las poblaciones? La verdad es que la violencia tiene una importante responsabilidad, pero no es un factor definitivo. La ausencia de Estado genera carencias en la población que el dinero de estas organizaciones suple, ganando lealtad y legitimidad.

Desde el año 2016, el Estado venezolano se ha dedicado a explotar de manera criminal los recursos naturales del sur del estado Bolívar. Esto ha derivado en el famoso arco minero del Orinoco¹², minas legales e ilegales donde se extraen principalmente oro, diamantes y coltán. En muchas de esas localidades, la ausencia de servicios es absoluta; abriendo paso al control de la zona por bandas criminales que se encargan de ejercer de autoridad: ellos arreglan carreteras, acueductos e instalaciones eléctricas, garantizan seguridad y limpieza de los lugares públicos y, a grandes rasgos, aseguran que exista el orden tradicional al que uno aspira en su comunidad.

Este sistema criminal, bastante retorcido, juega a dos cosas: el pago por estos servicios de facto y una lealtad absoluta ante cualquier amenaza externa. Ahora veremos cómo se presentan estas dos realidades. En la primera, cada habitante debe contribuir con algo denominado “vacuna”, que es una extorsión en la que, si no pagas mensualmente, recibes un castigo –en algunos

12 Ramón Cardozo Álvarez, “El Arco Minero venezolano: una política depredadora”, *DW*, 25 de mayo de 2022, <https://www.dw.com/es/el-arco-minero-venezolano-una-pol%C3%ADtica-depredadora/a-61934013>

casos llegando a la muerte-. Esta sustitución del poder político tradicional -por ejemplo, un alcalde- genera una dependencia de los habitantes hacia los criminales y, así cuando para el Estado son incómodos y deciden actuar sobre estas organizaciones, los habitantes juegan papeles de informantes, cooperadores o miembros de sus familias pasan a trabajar en las organizaciones criminales; viendo al Estado o sus cuerpos de seguridad como los que están rompiendo el orden establecido. Todo esto recae en que ese territorio se pierda por completo y deje de ser parte del monopolio de la violencia legítima, así como que este teatro de operaciones se use a beneficio de la criminalidad.

Este ciclo se multiplica en muchas más zonas, y en algunos casos son los criminales los que deciden ser parte activa de la vida política, bien sea por influencia económica o participando activamente en la vida pública. Poco a poco, los narcotraficantes tienen más y más influencia: controlan medios de comunicación, grandes cadenas de almacenes de ropa, electrodomésticos, supermercados, centros comerciales, restaurantes y equipos deportivos. La ciudadanía sabe de dónde vienen esas riquezas, pero prefiere callar o pasarlo por alto. El mismo Estado aupó el crecimiento de estos grandes narcotraficantes porque gracias a ellos, mediante estas economías sumergidas¹³, pueden financiarse campañas electorales y contribuir al enriquecimiento ilícito para sus arcas personales y en países sancionados, a través del lavado de activos, esquivar sanciones de personeros del estado. Poco a poco vemos cómo van tomando mayor influencia en los distintos poderes.

13 Marc Fortuño, "La economía sumergida y su papel en el mundo", *World Economic Forum*, 1 de diciembre de 2019, <https://es.weforum.org/stories/2019/12/la-economia-sumergida-y-su-papel-en-el-mundo/>

En países con regímenes democráticos el proceso es gradual y lento, e incluso puede tomar muchos años. Inicia desde el poder ejecutivo en tercer grado: desde los municipios en donde, o se van comprando concejales, o se hacen elegir afines para tener mayor influencia. Luego, escalamos a tener alcaldías y, en algunos casos, gobernadores. En este punto, controlan importantes espacios de territorio, pues se establecen rutas y laboratorios que cuentan, en su mayoría, con la protección de cuerpos de seguridad del Estado. Posteriormente, inicia la segunda fase: penetrar al poder legislativo y judicial, con el objetivo de promulgar leyes afines, sentencias que los absuelva de crímenes o amnistías, acompañado de grandes dosis de corrupción y violencia. Entre carteles se disputan quién puede tener mayor control político y el Estado beneficia al cartel que lo ayude a tener mayor control político y social de la población. Y, en el peor de los casos –y el más común en estos tiempos– el cartel que tiene más apoyo es aquel donde existe mayor cantidad de miembros que controlan las instituciones, haciendo que estos carteles tengan un poder nunca antes visto.

Existe una tercera fuente de crecimiento de estos carteles, se trata de cuando los miembros de las instituciones fundan un cartel desde adentro de la organización, generando la normalización de la criminalidad desde los organismos que deberían ser ejemplo para la ciudadanía. Estos carteles de la droga –que se sustentan bajo un manto de legalidad y legitimidad– usan las instituciones para facilitar la obtención de ganancias ilícitas y así normalizar sus fortunas y para conseguir más poder económico y político.

Dado a las circunstancias de las instituciones y su esquema de organización piramidal, las élites van corrompiendo de arriba hacia abajo a todos sus miembros, generando una corrupción institucional que no es nueva en nuestros sistemas latinoamericanos,

pero que por primera vez el *input* no viene del exterior, sino de la misma institución. Las élites políticas, económicas y empresariales son las primeras en corromperse y van esparciendo la enfermedad por cada rincón de la sociedad. Logrando que, poco a poco el daño antropológico se acreciente y el valor de las personas no se clasifique por sus sistemas de creencias o de valores, sino por el peso de su posición económica o social.

Es así como el narcotráfico y sus corruptelas lograron lo que Rubén Blades –a finales de los años 70– relató con la canción *Plástico* sobre nuestras sociedades, que se vacían por completo y sólo se llenan con falsos estatus sociales de dinero y postureo y, las injusticias dejan de importar: “*mientras la política no afecte mi bolsillo, no me debería importar*”. A su vez, las instituciones encargadas de defender y combatir al narco no son más que la máscara de estos nuevos carteles.

Hace tiempo quedaron atrás los grandes carteles de la droga, como Medellín, Cali, el Norte del Valle o Sinaloa. Si bien todavía existen carteles de la vieja escuela –como en las series de televisión– lo cierto es que las estructuras criminales han evolucionado y ahora prefieren tener un perfil más bajo, que pase totalmente desapercibido dentro de las propias instituciones; específicamente en las relacionadas al orden público y la defensa territorial. Estas son corrompidas y luego pasan a ser parte activa de la distribución de drogas y armas, donde el peso de la legalidad que les brinda el Estado les permite tener control absoluto sobre grandes espacios territoriales, vías de transporte como carreteras, pistas de aterrizaje, puertos y hasta centros penitenciarios. Los países donde estos fenómenos han tomado mayor fuerza son

Ecuador¹⁴, México¹⁵, Venezuela y Colombia¹⁶; mientras que en países como Argentina¹⁷ y Chile se ha empezado a presentar este fenómeno en menor medida.

Gracias a los elementos expuestos es posible definir al narcotráfico como un pulpo que toca con sus tentáculos todos los sectores de la sociedad, especialmente la esfera política y económica, con la compra de las élites como factor fundamental para la destrucción sistemática de la sociedad y de todo orden existente. Una nación con una institucionalidad fuerte y una ciudadanía activa y consciente tiene menos probabilidades de dejarse comprar por los tentáculos de los narcos, ofreciendo mayor resistencia porque las políticas son más eficaces para el combate de la corrupción, la violencia y el narcotráfico.

Para nadie es un secreto que la historia republicana de América Latina está marcada por una gran inestabilidad política, en un limbo entre autocracias de cortes militares y democracias

14 "4 gráficos que muestran la extensión y el impacto de las principales bandas criminales en Ecuador", BBC News Mundo, 16 de enero de 2024, <https://www.bbc.com/mundo/articles/cw0llyjqlro>

15 "Homicidios asociados al narco han aumentado 300%, según el Índice de Paz México", Infobae, 1 de junio de 2023, <https://www.infobae.com/mexico/2023/06/01/homicidios-asociados-al-narco-han-aumentado-300-segun-el-indice-de-paz-mexico/>

16 Valentina Parada Lugo, "Colombia bate su récord de cultivos de coca por tercer año consecutivo, con 253.000 hectáreas en 2023", *El País*, 18 de octubre de 2024, <https://elpais.com/america-colombia/2024-10-18/colombia-bate-su-record-de-cultivos-de-coca-por-tercer-ano-consecutivo-con-25300-hectareas-en-2023.html>

17 "Cómo la violencia convirtió a Rosario en "una anomalía narco" en Argentina y la polémica que causa la propuesta de enviar al ejército que analiza Milei", BBC News Mundo, 14 de marzo de 2024, <https://www.bbc.com/mundo/articles/cy6zd2gv734o>

endebles, con grandes niveles de corrupción y élites desconectadas de la población.

En ese contexto, las fuerzas militares eran un factor fundamental para legitimar a través de las armas a los gobiernos o para derrocarlos. Los militares no eran figuras institucionales sino actores políticos activos con gran influencia que, por razones ideológicas, quitaban e imponían gobernantes, siendo los enemigos más flagrantes del sistema democrático. Ejemplo de esto fueron las dictaduras¹⁸ como las de Videla en Argentina, Strogoner en Paraguay, Pinochet en Chile y Somoza en Nicaragua, siendo las más sonadas, igual que Uruguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela, países que también vivieron sus dictaduras militares¹⁹.

La forma de actuar fue similar en todos los países, con pequeños matices, pero mediante un golpe de Estado los militares tomaban el poder, sometiendo a cualquier disidencia política mediante el terrorismo de Estado e imponiendo un sistema dictatorial sin ningún tipo de libertades, con grandes violaciones de DDHH y bajo la excusa del reestablecimiento del orden interno, permaneciendo largos períodos de tiempo en el poder.

Estos, sin duda, eran los principales enemigos de las democracias latinoamericanas. Con el paso del tiempo todo cambió y los autoritarismos se nutrieron de otras formas para alcanzar el poder: ya no son los golpes de Estado o las rebeliones militares los

18 "Dictaduras en América Latina", La Vanguardia, 4 de junio 2021, <https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200304/473796480155/dictaduras-america-latina.html>

19 Álvaro Merino, "Las dictaduras en América Latina desde 1945", *El Orden Mundial*, 17 de noviembre de 2019, <https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/dictaduras-en-america-latina/>

mecanismos para derrotar al sistema democrático. Hoy en día, el populismo y la corrupción son mecanismos para desmembrar a las instituciones y, por la rendija de la cloaca de la inmoralidad, se ha colado el narcotráfico como mecanismo, no solo para alcanzar el poder sino para mantenerse en él bajo el apoyo de los gobiernos de extrema izquierda, pertenecientes al Foro de Sao Paulo o Grupo de Puebla, que han visto al narcotráfico como un mecanismo ideológico para la destrucción del enemigo más grande, Estados Unidos y para alcanzar el poder definitivo en sus respectivos países.

Lo que al principio era un pequeño pacto de financiamiento y facilitamiento de operaciones en los territorios, se ha convertido en un matrimonio indivisible, en donde se pierde el rastro entre los narcotraficantes y los representantes del Estado. Habiéndose convertido, los países, en una especie de carteles abstractos donde se confunden la criminalidad y las instituciones.

Esto sin duda nos da un cambio de perspectiva sobre la lucha contra el narcotráfico y la democracia. Durante muchos años se creyó que era más fácil acabar con el narco desde regímenes con políticas autoritarias, sin respeto a los DDHH y sin un estado de derecho sólido, con cuerpos de seguridad sin control y sin ningún tipo de formación en materia de debidos procesos.

Para muchos expertos en materia de seguridad era más fácil triunfar en regímenes autoritarios que en democracia, pero la realidad es que el autoritarismo, al no existir ningún tipo de control entre las instituciones, genera más corrupción que la propia democracia. No existe lo que Giovanni Sartori definiría como *Demo-Control*, que no es otra cosa que las instituciones limitando

el *Demo-Poder*²⁰ de otras instituciones. Todo se vuelve grisáceo en cuanto a las auditorías que deberían recibir las organizaciones del Estado y, poco a poco sus miembros gozan de impunidad total, lo que facilita que, por mantener el poder, todo sea permitido y el dinero del narcotráfico se vuelva atractivo.

La forma de funcionamiento de los carteles es llevada a las instituciones y es esa jerarquía la que predomina, donde la lealtad va más allá del mérito, y todo aquel que adversa pasa a ser un enemigo, lo que lo convierte en un riesgo para el sistema y por tanto debe ser aniquilado. Estas prácticas, en democracia, reciben un rechazo generalizado, pues existen medios para contrarrestar tales corruptelas y la sociedad se une en rechazo total a estos fenómenos. Pero en el autoritarismo no existen voces que se eleven en contra del sistema, las pocas que se elevan buscan ser silenciadas y desaparece el espacio público porque el miedo controla todas las esferas de sociedad -sobre todo la de los más pobres- donde el abuso policial es una constante y la dignidad, junto a la conciencia, es castigada por parte de las bandas criminales que buscan aprovecharse de la ausencia de progreso y desarrollo que el mismo sistema político ha generado. Vendiendo, de esta manera, que la única forma de progresar es a través de la corrupción y la criminalidad en sus distintas formas.

A modo de conclusión, es fundamental que todas las personas que nos dedicamos al ejercicio de la política, asumamos el compromiso de reconocer el narcotráfico como un adversario real, que está acabando con la democracia y se está instaurando como una nueva forma de hacer política. Donde -mediante el dinero y las conexiones- se compran curules, puestos en partidos e influen-

20 “Transparencia y regimen democratico”, Cap. II, <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2418/5.pdf>

ciadores para lavar la imagen. Y es que el objetivo no es alcanzar el poder para robustecer sus negocios, sino acabar con el sistema democrático para consolidar el modelo político del socialismo del siglo XXI: autoritarismo puro y duro. En el que, bajo una excusa ideológica, pretenden acabar con la democracia del continente, consolidando un pensamiento único y sin disidencia, lleno de sociedades superfluas y sin sentido de pertenencia, desprovistas de valores o moralidad.

El mejor remedio a este fenómeno no es otro que la libertad. No puede haber progreso ni desarrollo en América Latina sin libertad y democracia. No existe otro modelo que pueda vencer al narcotráfico que no sea una sociedad fuerte, con partidos políticos firmes y formados, que entiendan que aceptar al narcotráfico no es otra cosa que tomar voluntariamente veneno para su auto-destrucción. Un modelo en el que las elites empresariales puedan entender que el blanqueo de activos del narco es el caldo de cultivo para el fin de las libertades financieras y el incremento de crímenes comunes como extorsión, secuestro y sicariato. También una ciudadanía formada y decidida a rechazar la corrupción, desde las esferas más altas hasta las más bajas, donde el soborno sea mal visto y el Estado se vea obligado a actuar contra las corruptelas a través de sus funcionarios.

La receta contra el narco no es otra cosa que los valores democráticos que ya conocemos y que no son extraños para nosotros: libertad, transparencia, honestidad, ética empresarial, institucionalidad y respeto al estado de derecho. Algo que damos por sentado, como la libertad de expresión, es fundamental en esta lucha, pues se trata de uno de los pilares para vencer al autoritarismo impulsado por el narcotráfico: periodistas valientes, institutos de formación, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales.

mentales –dedicadas a luchar por la transparencia del Estado y el respeto al estado de derecho–, así como organizaciones dedicadas a vencer la normalización de la violencia y restablecer el tejido social, sobre todo en territorios afectados por la violencia generada por el narcotráfico.

Es un deber irrevocable la formación en materia de DDHH a los funcionarios de orden público, pues las organizaciones no pueden aprovechar la guerra contra las drogas para seguir acrecentando la brecha en un tejido social tan vulnerado por la violencia.

La libertad es el mayor valor inherente a la democracia. Es el principal medio para defender a nuestras sociedades del autoritarismo impulsado por el narcotráfico. Ya no son los militares con golpes de medianoche y bandos militares en viejas emisoras. Los enemigos del sistema democrático son los narcotraficantes vestidos de políticos, empresarios, *outsiders* o criminales, reinser-tados a la sociedad mediante el blanqueo de sus crímenes gracias al dinero. La labor de estos enemigos es lenta, pero incesante. Son silenciosos y cautos y, sobre todo, autoritarios. Para ellos, la democracia es su enemiga y por tanto no descansarán hasta vencerla.

La pregunta que debemos hacernos es ¿hasta qué punto estamos dispuestos a tolerar al nuevo enemigo?

Ayuda Humanitaria en Venezuela: del asistencialismo a la generación de capacidades

Samuel Díaz

**Este artículo fue escrito antes del 28 de julio
pero por motivos de seguridad
duró más de 300 días en publicarse.*

La ayuda humanitaria en Venezuela está lejos de terminar; de hecho, se estima que será necesaria por al menos los próximos cinco años, y todo está sujeto al cambio del modelo político y económico en el país. Enfrentamos desafíos significativos debido a una crisis multifacética que abarca aspectos políticos, económicos y sociales. La situación, exacerbada por la corrupción y la mala gestión, ha llevado a una grave desigualdad, pobreza y falta de acceso a servicios básicos, afectando la vida de millones de venezolanos. Este artículo explora las dificultades y propone enfoques integrales para transformar el asistencialismo en generación de capacidades, buscando soluciones sostenibles a largo plazo para las comunidades afectadas.

Cuando comienzas a trabajar con comunidades vulnerables y en proyectos humanitarios, lo primero que te dicen es: “no te apegues y aprende a dejar los sentimientos en casa”. Pero, ¿cómo uno se desliga y deja su humanidad guardada en una gaveta? ¿Cómo no emocionarse cuando ves a los bebés con los que trabajas en temas nutricionales crecer y la cara de alivio de sus madres? ¿Cómo no sonreír cuando ves progresos en pacientes en proyectos de salud o agua? ¿Cómo no alegrarte cuando los niños en las escuelas pueden ser niños nuevamente?

Sin embargo, así como hay luz, también hay oscuridad, porque esa es la dualidad del mundo humanitario. ¿Cómo no indignarte cuando oficiales del régimen amenazan o se llevan el crédito de un proyecto que no es suyo? ¿Cómo no asustarte cuando te detienen en una alcabala, cargando insumos humanitarios, y te llenan de terror con el fin de extorsionarte? ¿Cómo no llorar cuando uno de los beneficiarios con los que trabajabas muere, o te enteras de la noche a la mañana que ya no está en el país, decidió migrar o se involucró en actividades ilícitas? ¿Cómo no sentirse abrumado cuando ves la niñez desaparecer de los ojos de los niños?

Esta es la dualidad que hoy vivimos en Venezuela y que he podido ver en los últimos siete años. Trabajar en estos contextos te expone a una montaña rusa emocional constante. Las alegrías y los logros son inmensamente gratificantes, pero las tristezas y las injusticias pueden ser devastadoras.

Siempre he pensado que cuando uno emigra, se convierte en embajador de su país, aunque no sea una responsabilidad que uno elija. Conozco a varios que se fueron huyendo, traumatizados por la situación, con heridas abiertas y solo querían desaparecer. Pero yo, como estudiante en la Universidad de Oxford, no podía permi-

tirme desperdiciar la oportunidad para elevar y hablar de lo que sucedía en Venezuela.

Llevaba años trabajando en política y en el sector humanitario, pero siempre me dejaba *fuera de base* la pregunta: ¿Qué está pasando exactamente en Venezuela? Esa fue la misma pregunta que me hicieron no menos de 50 veces en la primera semana del postgrado.

En esos momentos, tu cerebro empieza a funcionar a toda velocidad. ¿Cómo armar el rompecabezas? ¿Por dónde empiezo? ¿La llegada de Chávez al poder en el 98? Pero Chávez fue una consecuencia, no una causa. ¿Voy más atrás? ¿Hablo de la constituyente del 99, de la elección de Arias Cárdenas vs. Chávez, del 11 de abril, de Carmona Estanga, del regreso de Chávez, del paro petrolero, de la elección presidencial del 2006 entre Maduro y Rosales, del cierre de RCTV, de la reforma y el movimiento estudiantil, de Capriles vs. Chávez, de la muerte del “comandante supremo”, de Capriles contra Maduro, de las protestas del 2014, de las elecciones de la Asamblea en el 2015, del boicot del TSJ en el 2016 y 2017, de las protestas estudiantiles en el 2017, del lúgubre panorama político de 2018 con una elección presidencial cuestionada y el apagón, la protestas, del gobierno interino del 2019?

¿Cómo resumir, en ese momento, 21 años de historia para explicar la emergencia humanitaria compleja? Más de una vez me respondieron: “Ah, es que yo pensaba que era culpa de las sanciones” o “Mie**... no sabía que eso estaba pasando en Venezuela”.

En un mundo simultáneamente afectado por crisis y emergencias humanitarias originadas por conflictos de gran magnitud, como la guerra en Ucrania, el conflicto palestino-israelí, la

guerra en Siria y la arremetida talibán en Afganistán, que se pueden resumir en una sola frase, la situación en Venezuela se agrava cada vez más. La convergencia de estas crisis globales hace que materializar proyectos para acompañar la emergencia humanitaria que vive Venezuela sea cada vez más complejo.

La atención mediática y el enfoque de las organizaciones humanitarias están dispersos en múltiples frentes, lo que reduce significativamente el apoyo específico para Venezuela. Esta situación demanda una mayor creatividad y perseverancia en la búsqueda de soluciones viables que permitan atender las necesidades críticas de la población venezolana.

Este es el primer reto de explicar la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, que ya tiene siete años decretada y que no va a cambiar mientras no exista una voluntad política de hacer los cambios de modelos. Cada año se necesita más ayuda, pero se tienen menos fondos. Este problema se divide en tres aspectos principales: la captación de recursos, el cierre de programas y el enfoque de los programas.

En cuanto a la captación de recursos, cada vez se vuelve más difícil atraer fondos suficientes para atender las crecientes necesidades. Adicionalmente, cuando las organizaciones internacionales deciden cerrar proyectos en Venezuela de manera abrupta, terminan generando más dependencia, aunque sus intenciones sean buenas. Estos proyectos, que han sido prolongados, resultan en soluciones aleatorias mientras no haya un cambio de sistema en Venezuela. El impacto negativo cuando se van es peor que cuando llegaron, porque no generan capacidades para que las comunidades tengan las herramientas necesarias para solventar

sus necesidades. Además, muchas personas quedan desempleadas, perdiendo de la noche a la mañana sus ingresos competitivos.

El enfoque de los programas también juega un papel crucial. Muchas veces, los programas no están diseñados para fortalecer las capacidades locales, sino que se centran en la asistencia inmediata, lo que perpetúa la dependencia en lugar de promover la autosuficiencia. Por lo tanto, para abordar eficazmente la emergencia humanitaria en Venezuela, es esencial no solo aumentar la captación de recursos, sino también diseñar programas que se enfoquen en desarrollar las capacidades de las comunidades y asegurar una transición ordenada y sostenible cuando sea necesario cerrar proyectos.

La emergencia humanitaria compleja en Venezuela tiene muchas ramas y en este texto intentaré dar luces sobre cuáles son los retos externos e internos y qué podemos hacer para dejar de crear dependencia y comenzar a generar capacidades.

Actualmente, la escasez, como en 2019, no es lo que define esta emergencia humanitaria compleja, sino que ahora hay desigualdad, precariedad y pobreza. Desde 2019, con la entrada de la ayuda humanitaria, las cosas han seguido empeorando, aunque sin esta ayuda estaríamos en una situación mucho peor. Venezuela está atravesando una de las emergencias humanitarias más devastadoras del mundo, resultado de una compleja mezcla de factores políticos, económicos y sociales. A diferencia de muchas emergencias humanitarias provocadas por desastres naturales o conflictos armados, la crisis en Venezuela es mayoritariamente de origen humano, resultado de años de mala gestión económica, agitación política y corrupción sistémica.

Pero, ¿cómo se ve en números la Emergencia Humanitaria Compleja en julio de 2024? La mejor radiografía la provee el artículo “Hunger, healthcare, and schools: Reasons to leave Venezuela (along with a Maduro poll win)” publicado en *The New Humanitarian* en junio de 2024:

La población de Venezuela es de 28.8 millones de personas. Los precios han aumentado debido a la inflación, y el salario mínimo está congelado en menos de \$4. La dolarización no ha mejorado la economía, y las carencias de servicios básicos ahora afectan incluso a la capital, Caracas. Más de cinco millones de personas sufren desnutrición. Desde 2015, el PIB ha caído un 80% y el salario mínimo un 95%. Según Susana Raffalli, el “60-80% de personas en áreas pobres han recurrido a estrategias de afrontamiento negativas, como lo es vender productos personales (ropa, joyería, electrónicos) para poder comprar comida.

El sistema de salud está colapsado. Provea reporta una reducción de capacidad del 80%. Conвите señala que la escasez de medicinas alcanzó el 28.4%. Médicos por la Salud informa que el 40% de los quirófanos no funcionan y hay un 74% de escasez de suministros quirúrgicos. El racionamiento de agua afecta a 20 millones de personas, y los cortes de electricidad afectan al 62% de la población.

La infraestructura educativa está deteriorada. Hay una falta de maestros y de transporte público, y los programas de comidas escolares son insuficientes. El 40% de los estudiantes entre 3 y 17 años asisten a la escuela de manera irregular.

En su informe anual de 2023, HumVenezuela reportó que 20.1 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria y protección, 400,000 más que en 2022. Durante la primera

mitad del año pasado, solo se financió el 14% del Plan de Respuesta Humanitaria (HRP) de la ONU, siendo el segundo más subfinanciado a nivel mundial. La respuesta mejoró en la segunda mitad, permitiendo financiar el 52.9% del HRP. Organizaciones internacionales de ayuda, como la Organización Panamericana de la Salud, USAID, el Programa Mundial de Alimentos y otras agencias de la ONU, operan en Venezuela, pero enfrentan constante interferencia y acoso por parte del gobierno. La asistencia proporcionada no es suficiente para satisfacer las necesidades.

En octubre pasado, el Secretario General de la ONU, António Guterres, dio luz verde para que la ONU comenzara a administrar un fondo fiduciario estimado en \$3 mil millones para abordar las necesidades de emergencia en Venezuela. Los fondos provendrían de activos congelados de Venezuela en el extranjero. Sin embargo, el fondo fiduciario estaba ligado a las negociaciones políticas entre el gobierno de Maduro y la oposición. El 17 de octubre, el mismo día en que se autorizó la creación del fondo fiduciario, Maduro y la oposición firmaron un acuerdo en Barbados, allanando el camino para elecciones libres este año y llevando a los EE.UU. a aliviar las sanciones petroleras a Venezuela. Pero a medida que la oposición ganó fuerza, Maduro comenzó a ignorar el acuerdo de Barbados, los EE.UU. reinstauraron las sanciones y el fondo fiduciario quedó en el limbo. En julio de 2024, solo se había financiado el 9.5% del HRP de Venezuela para 2024¹.

-
- 1 Gabriela Mesones Rojo, Iván Reyes, “Hunger, healthcare, and schools: Reasons to leave Venezuela as Maduro looks to poll win”, *The New Humanitarian*, 25 de junio de 2024. <https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2024/06/25/hunger-healthcare-schools-reasons-leave-venezuela-maduro-poll-win>

Más de siete millones de venezolanos han huido del país, creando una significativa crisis de refugiados en los países vecinos, especialmente Colombia, Perú y Brasil. Estas personas han dejado atrás sus hogares, familias y vidas en busca de seguridad y una mejor calidad de vida. La continua lucha de poder entre el gobierno de Nicolás Maduro y las fuerzas de oposición ha llevado a sanciones internacionales y ha exacerbado la situación económica. La incertidumbre política deja a los ciudadanos en un limbo desesperante. Informes de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y represión generalizada de la disidencia han sido documentados por organizaciones internacionales de derechos humanos. La opresión y el miedo son una realidad diaria para muchos venezolanos.

El Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2024 proporciona un panorama crítico sobre la situación de los venezolanos migrantes y refugiados en necesidad y el estado del financiamiento destinado a asistirlos. Más de 8.89 millones de venezolanos requieren asistencia humanitaria urgente, y se ha establecido un objetivo de asistencia para 2.93 millones de personas. Hasta el 30 de abril de 2024, se ha logrado asistir a 326.8 mil personas, lo que representa solo el 11.1% de la población meta a atender fuera de Venezuela.

El financiamiento y la asistencia internacional han sido cruciales, aunque las donaciones per cápita y el total recibido desde 2014 han sido insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los migrantes y refugiados venezolanos. Comparando con otras crisis humanitarias, se observa una disparidad significativa en la asignación de recursos. En una presentación de 2021 de David Smolansky, se destacaron las siguientes cifras: los refugiados sirios han recibido un promedio de \$5,000 per cápita, los refu-

giados de Sudán del Sur alrededor de \$3,000 per cápita, mientras que los refugiados venezolanos significativamente menos, con un promedio de menos de \$150 per cápita. Estas cifras reflejan la urgencia y la necesidad de aumentar los esfuerzos internacionales para proporcionar un apoyo adecuado a la población venezolana desplazada.

Para poner todo en perspectiva, según el *Financial Tracking Service* de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), en 2024 se estimó que se recaudaron 32.92 billones de dólares para ayuda humanitaria a nivel mundial. De ese monto, a Venezuela se le asignaron solo 192.8 millones de dólares, lo que representa apenas el 1.71% del total, un porcentaje insuficiente para la crisis humanitaria más grave de la región². Además, el mismo servicio financiero de la ONU reflejó que para 2024, Venezuela requería 617 millones de dólares en fondos para asistencia humanitaria. Sin embargo, solo se recaudaron 193 millones, es decir, el 27.4% de lo necesario³. Si lo traducimos a términos prácticos, esto significa que solo aproximadamente 3 de cada 10 personas que necesitaban ayuda humanitaria recibieron apoyo.

Las diferencias en las donaciones totales por crisis humanitaria desde 2014 son notables. Siria ha recibido miles de millones de dólares en asistencia internacional, Sudán del Sur también ha

2 “Crisis and Emergency Response”, United Nations, <https://fts.unocha.org/home/2024/countries>

3 “Snapshot of Total Humanitarian Funding”, Financial Tracking Service, OCHA, <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojNGE3NGU5OWI0tNWlWYy00NGJlLWI5ZTU0tNGJhYzBiYWVhNjlmIiwidCI6IjBmOWUzNWRRiLU0NGYtNGY2MCIiZG9jLTVIYTQxNmU2ZGM3MCIiImMiOj99&pageName=ReportSection41093ce46c53210880ac>

recibido una cantidad considerable de donaciones, mientras que Venezuela ha recibido mucho menos en comparación, destacando una disparidad en la respuesta internacional.

El aumento de la cooperación con organizaciones internacionales como la ONU, la OMS y organismos regionales puede mejorar la efectividad de la entrega de ayuda. La diáspora venezolana, que permanece profundamente conectada con su país, puede desempeñar un papel vital proporcionando remesas, defensa y experiencia técnica. Las inversiones en agricultura pueden ayudar a reducir la dependencia de las importaciones y mejorar la seguridad alimentaria. Las asociaciones internacionales pueden ayudar a reconstruir la infraestructura sanitaria de Venezuela, proporcionar medicamentos esenciales y capacitar a los trabajadores de la salud.

Para enfrentar eficazmente la crisis, es crucial que el aumento de capacidades incluya un aumento significativo del financiamiento. Solo así se podrán cubrir las necesidades básicas de la población y avanzar hacia la recuperación. La continua lucha de poder y la falta de consenso político dificultan la implementación y sostenibilidad de los programas de ayuda humanitaria. La corrupción generalizada dentro del gobierno y las instituciones públicas obstaculiza el uso eficiente de los recursos de ayuda. Los altos niveles de criminalidad y violencia, incluidos los riesgos para los trabajadores humanitarios, complican la entrega de asistencia humanitaria. Las sanciones económicas limitan la capacidad del país para importar bienes necesarios y financiar esfuerzos humanitarios. Años de abandono han llevado al deterioro de infraestructuras críticas, incluidas carreteras, servicios públicos y servicios públicos, complicando la logística de la ayuda.

En el esfuerzo de socorro tras el tsunami del Océano Índico en 2004, la respuesta internacional fue rápida y los esfuerzos coordinados entre numerosas ONG y contribuciones financieras significativas. En la erradicación de la viruela, la OMS lideró una campaña global de vacunación que erradicó con éxito la enfermedad en 1980. Estos ejemplos muestran que la coordinación y colaboración entre organizaciones internacionales, gobiernos y ONG son cruciales para el éxito de las operaciones humanitarias.

El terremoto de Haití en 2010 mostró cómo la mala coordinación y la falta de infraestructura llevaron al uso ineficiente de los recursos. La hambruna en Somalia en 2011 destacó la importancia de sistemas de alerta temprana y la respuesta oportuna. Ambos ejemplos subrayan la necesidad de coordinación efectiva, rendición de cuentas y construcción de la capacidad local para asegurar que la ayuda llegue a quienes la necesitan.

La situación en Venezuela es una tragedia que requiere atención urgente y un enfoque multifacético. Para enfrentar la crisis y avanzar hacia la recuperación, es fundamental considerar varios aspectos clave que, en conjunto, pueden ayudar a aliviar la emergencia humanitaria y sentar las bases para un futuro más estable y próspero. Aunque es evidente que un cambio de modelo de gobierno facilitaría esta transición, la ayuda humanitaria seguirá siendo crucial. Con un gobierno más capaz y comprometido, la implementación de la ayuda humanitaria sería más fácil, efectiva y de mayor envergadura; dado pasos de proyectos de atención inmediata a proyectos enfocados en generación de capacidades.

Enfoque integral necesario

Abordar la crisis humanitaria en Venezuela requiere una combinación de resolución política, estabilización económica y apoyo social. La resolución política es esencial para restablecer la gobernabilidad y la confianza en las instituciones. Esto implica facilitar un diálogo inclusivo entre todas las partes interesadas, promoviendo un entorno donde se respeten los derechos humanos y se restauren las normas democráticas. La estabilización económica pasa por implementar políticas que frenen la hiperinflación, fomenten la inversión extranjera y reestructuren la deuda nacional. El apoyo social debe enfocarse en mejorar la calidad de vida de los venezolanos, garantizando el acceso a alimentos, medicinas y educación.

Fortalecimiento de la capacidad local

Empoderar a las ONG locales y a las organizaciones de la sociedad civil puede mejorar la efectividad y sostenibilidad de los esfuerzos de ayuda. Estas entidades, al estar más conectadas con las comunidades locales, entienden mejor las necesidades específicas y pueden ofrecer soluciones más adecuadas y rápidas. Fortalecer su capacidad implica proporcionar formación, recursos financieros y apoyo logístico. Además, es crucial fomentar la colaboración entre las ONG locales e internacionales para asegurar una respuesta coordinada y eficiente. La creación de redes y alianzas estratégicas puede maximizar el impacto de las intervenciones y asegurar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan.

Aunque las ONG y organizaciones internacionales juegan un papel crucial en la provisión de asistencia, su labor esencial es dotar a las comunidades de las capacidades necesarias para que, una vez finalizados los proyectos, estas puedan ser sosteni-

bles y autosuficientes. Es vital que las comunidades desarrollen herramientas y habilidades que les permitan depender de ellas mismas. Esto no solo garantiza la continuidad de los proyectos a largo plazo, sino que también promueve el desarrollo local y la resiliencia ante futuras adversidades.

Proporcionar formación específica en áreas clave como gestión de proyectos, administración financiera, y técnicas agrícolas o comerciales es fundamental. Asimismo, dotar de recursos financieros, como microcréditos o fondos semilla, permite a las comunidades iniciar y mantener actividades económicas sostenibles. El apoyo logístico, incluyendo el acceso a tecnologías y infraestructura básica, también juega un papel determinante en el éxito de estos esfuerzos.

Fomentar la colaboración entre ONG locales e internacionales es crucial para asegurar una respuesta coordinada y eficiente. La creación de redes y alianzas estratégicas permite compartir conocimientos, recursos y experiencias, lo que maximiza el impacto de las intervenciones. Trabajar en conjunto no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también fortalece el tejido social y económico de las comunidades, asegurando que la ayuda llegue a quienes más la necesitan y que las soluciones implementadas sean duraderas y adaptadas a las realidades locales.

Incluir apoyo psicológico para trabajadores humanitarios

Trabajar en terreno con comunidades vulnerables es una tarea que inevitablemente crea vínculos emocionales profundos. Los trabajadores humanitarios a menudo enfrentan situaciones traumáticas y desgarradoras que pueden afectar su bienestar

emocional y mental. Es indispensable que se contemplen protocolos humanitarios que incluyan apoyo psicológico para todo el personal que trabaja en campo. Este apoyo puede incluir sesiones de terapia regular, grupos de apoyo y capacitación en habilidades de afrontamiento. Proporcionar estas herramientas es esencial para que los trabajadores humanitarios puedan lidiar con las situaciones difíciles y mantener su salud mental, lo que a su vez les permite continuar su trabajo de manera efectiva y sostenible.

El apoyo psicológico no solo ayuda a los trabajadores a mantenerse saludables y efectivos en su trabajo, sino que también asegura que puedan seguir proporcionando un apoyo de alta calidad a las comunidades a las que sirven. Es importante reconocer que la salud mental de los trabajadores humanitarios es fundamental para el éxito de cualquier intervención humanitaria. Los protocolos humanitarios deben incluir componentes de salud mental y bienestar para todo el personal, garantizando que tengan los recursos necesarios para lidiar con las situaciones difíciles que enfrentan y un espacio seguro para ventilar y apoyarse mutuamente cuando sea necesario. Los trabajadores que están emocionalmente saludables pueden desempeñar sus funciones de manera más efectiva, lo que mejora la calidad de la ayuda que se brinda. Además, un entorno de trabajo que promueve el bienestar mental puede reducir la rotación del personal, asegurando que las comunidades reciban asistencia de profesionales experimentados y dedicados.

Aprovechamiento de la tecnología

Utilizar la tecnología para una distribución eficiente de la ayuda, monitoreo y comunicación puede mejorar significativamente la transparencia y el alcance de los programas humanita-

rios. Plataformas digitales pueden facilitar la gestión de recursos, el seguimiento de las necesidades de las comunidades y la evaluación del impacto de las intervenciones. Las aplicaciones móviles y los sistemas de datos en tiempo real pueden ayudar a identificar rápidamente las áreas más afectadas y coordinar la entrega de asistencia. Además, la tecnología puede mejorar la comunicación entre los diferentes actores involucrados en la respuesta humanitaria, asegurando que la información crítica se comparta de manera oportuna y efectiva.

Fomento del diálogo

Alentar el diálogo entre el gobierno, la oposición y la comunidad internacional es crucial para crear un ambiente propicio para la recuperación y el crecimiento. Este diálogo debe ser inclusivo y basado en el respeto mutuo, buscando soluciones consensuadas que beneficien a toda la población venezolana. La mediación internacional puede jugar un papel importante para facilitar estas conversaciones y asegurar que se mantengan constructivas. Promover un diálogo abierto puede ayudar a desescalar tensiones, construir confianza y allanar el camino para la implementación de reformas necesarias. Además, un diálogo efectivo puede atraer el apoyo y la colaboración de la comunidad internacional, esencial para la recuperación económica y social del país.

Trabajar en el ámbito humanitario en Venezuela es una montaña rusa de emociones. Ver a un niño sonreír de nuevo, a un bebé crecer sano o a un paciente mejorar nos llena de esperanza y nos recuerda por qué estamos aquí. Pero también enfrentamos el miedo, la tristeza y la injusticia, y eso nos desgasta y nos rompe el corazón.

Venezuela es un país de contrastes, donde lo bueno y lo malo van de la mano. Nos convertimos en embajadores de nuestra tierra, llevando su historia y sus dolores a cada rincón del mundo. Con nuestras experiencias, intentamos construir puentes de comprensión y solidaridad, soñando con el día en que las preguntas sobre nuestro país no sean de confusión, sino de admiración por nuestra resiliencia y el cambio que hemos construido.

La crisis en Venezuela es compleja y multifacética, pero con un enfoque integral que combine la resolución política, la estabilización económica y el apoyo social, es posible aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano. Fortalecer la capacidad local, proporcionar apoyo psicológico a los trabajadores humanitarios, aprovechar la tecnología y fomentar el diálogo son pasos cruciales para avanzar hacia un futuro más estable y próspero. La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos, mostrando solidaridad y humanidad, para ayudar a Venezuela a superar esta crisis y reconstruir un país donde sus ciudadanos puedan vivir con dignidad y esperanza.

La historia de Venezuela es complicada, y cada uno de nosotros lleva una parte de ese relato. Al compartir nuestras vivencias, ayudamos al mundo a entender la magnitud de nuestra lucha y el valor de nuestra esperanza. Porque, a pesar de todo, seguimos creyendo en un futuro mejor. Nos queda mucho camino por recorrer, muchos obstáculos por sortear y muchos corazones por sanar. Pero cada paso que damos, cada pequeña victoria, nos acerca un poco más a ese sueño de ver a Venezuela renacer. Y aunque a veces sea agotador y abrumador, mientras tengamos fuerza, seguiremos adelante, convencidos de que juntos podemos construir un mañana lleno de luz y esperanza para todos.

La importancia de la institucionalidad en el desarrollo económico

Asdrúbal Oliveros, Jesus Palácios Chacín

El Premio Nobel de Economía 2024 fue otorgado a **Daron Acemoglu, James A. Robinson y Simon Johnson** por sus contribuciones al entendimiento de cómo las instituciones económicas y políticas influyen en el desarrollo económico y el bienestar de las sociedades. Sus investigaciones multidisciplinarias en el tema institucional han continuado y robustecido el legado de otro Premio Nobel, Douglas North, quien introdujo la importancia de las instituciones democráticas para el desarrollo económico. Sin embargo, los actuales ganadores del Nobel han dado un paso más adelante demostrando que las instituciones inclusivas son fundamentales para el crecimiento económico sostenible, mientras que las instituciones extractivas perpetúan la pobreza y la desigualdad.

Ahora, ¿qué significan instituciones inclusivas y restrictivas? En su obra *Why Nations Fail*¹, Acemoglu y Robinson las definen de la siguiente manera: las instituciones inclusivas son aquellas que promueven la participación amplia en la economía, protegen los derechos de propiedad, fomentan la innovación y garantizan

1 Daron Acemoglu, James A. Robinson, *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*, Crown Business, Nueva York, 2012.

igualdad de oportunidades. Estas instituciones generan crecimiento económico sostenible.

Por su parte, las instituciones extractivas son diseñadas para beneficiar a una élite, limitan la participación económica y política, y concentran el poder y la riqueza. Estas instituciones conducen al estancamiento económico y perpetúan la pobreza. En esta obra, su trabajo cuantitativo se encarga de comparar el desarrollo económico de países con instituciones inclusivas frente a países con instituciones extractivas.

Y lo destacan en un ejemplo: para 1950, Corea del Sur y Corea del Norte tenían niveles similares de PIB per cápita, mientras que para 2010, Corea del Sur tenía un PIB per cápita 10 veces mayor explicado por su modelo económico abierto a los mercados y un marco de instituciones inclusivas. Para justificar este caso utilizan datos sobre distribución de tierras, ingresos y riqueza para mostrar cómo las instituciones extractivas perpetúan la desigualdad y limitan el crecimiento económico.

En otro trabajo de los autores, *Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth*², publicado como parte del Handbook of Economic Growth, utilizan indicadores como el índice de protección de derechos de propiedad y el índice de democracia en más de 80 países para medir la calidad de las instituciones en diferentes países, estos hallazgos les permiten estimar una fuerte correlación entre la calidad institucional y el crecimiento económico: un aumento de una desviación estándar en la calidad institucional

2 Daron Acemoglu, Simon Johnson, James Robinson, "Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth", en Handbook of Economic Growth, editado por Philippe Aghion y Steven Durlauf, Elsevier, Amsterdam, 2005, 385-472.

está asociado con un aumento del 2% al 3% en el crecimiento económico anual.

En este trabajo, también analizan el impacto de las instituciones en el crecimiento económico en comparación con otros factores, como la geografía y la cultura. Basado en data histórica de esos más de 80 países, encuentran que las instituciones explican más del 60% de la variación en el crecimiento económico a largo plazo. Mientras que en *Economic Backwardness in Political Perspective*³ analizan cómo las élites políticas pueden bloquear el desarrollo económico para mantener el poder.

En términos generales, los autores hacen uso de modelos matemáticos y utilizan variables instrumentales, como la mortalidad de colonos y la densidad de población precolonial, para aislar el impacto de las instituciones en el desarrollo y comprobar su incidencia. Entre los elementos cuantitativos utilizados están las tasas de mortalidad de colonos como variable instrumental para medir la calidad institucional, regresiones econométricas que muestran la relación entre instituciones y PIB per cápita, índices de calidad institucional, como protección de derechos de propiedad y democracia, comparaciones históricas de PIB per cápita entre países con instituciones inclusivas y extractivas, modelos matemáticos para explicar decisiones políticas y económicas de las élites.

El enfoque histórico: la colonización marcó a las generaciones posteriores.

Agregándole un enfoque histórico-geográfico a los antecedentes que nos derivan en el contexto latinoamericano y venezolano

3 Daron Acemoglu, James Robinson. "Economic Backwardness in Political Perspective", *American Political Science Review* 100 (1), 2006, 115-131.

actual, el trabajo *The Colonial Origins of Comparative Development*⁴, Acemoglu, Robinson y Johnson argumentan que las instituciones coloniales establecidas por las potencias europeas tuvieron un impacto duradero en el desarrollo económico de los países.

De acuerdo a los autores, en regiones donde los colonizadores enfrentan altas tasas de mortalidad (medidas por cada 1,000 soldados o misioneros), como en gran parte de América Latina, se establecieron instituciones extractivas diseñadas para explotar recursos y mano de obra, en lugar de fomentar derechos de propiedad y participación económica amplia. Para hacerlo, ellos relacionaron las tasas de mortalidad de colonos y su correlación con el PIB per cápita actual y a su vez la calidad de las instituciones (medida por índices como protección de derechos de propiedad) con el PIB per cápita actual, así encuentran que las instituciones explican entre el 50% y el 75% de la variación en el desarrollo económico entre países. Estas instituciones persistieron tras la independencia, creando estructuras económicas y políticas que perpetúan la desigualdad y limitan el crecimiento inclusivo.

En el contexto actual de América Latina, esta teoría sigue siendo relevante para entender los desafíos estructurales de la región, como la desigualdad económica, la debilidad institucional y la concentración del poder político y económico. Muchos países latinoamericanos aún enfrentan dificultades para construir instituciones inclusivas que promuevan el desarrollo sostenible y reduzcan las brechas sociales. Además, fenómenos como la corrupción, la inestabilidad política y la dependencia de economías extractivas reflejan las raíces históricas señaladas por

4 Daron Acemoglu, Simon Johnson, James Robinson. "The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation", *American Economic Review* 91 (5), 2001, 1369-1401.

Acemoglu y sus colegas, subrayando la necesidad de reformas profundas para superar estos legados coloniales.

Los trabajos de Acemoglu y North son elocuentes con la explicación de que las instituciones extractivas son parte esencial de la crisis venezolana y ofrecen un marco para entender cómo podría superarse. Sin embargo, el cambio institucional necesario para transformar la economía venezolana enfrenta enormes desafíos, incluyendo la resistencia de las élites políticas, la polarización política y la dependencia del petróleo. A pesar de ello, sus teorías también muestran que el cambio es posible si se logra construir consenso y movilización social en torno a la necesidad de instituciones inclusivas que promuevan el desarrollo económico y el bienestar de todos los ciudadanos.

Las instituciones y el contexto venezolano:

La relación entre los trabajos de Daron Acemoglu y Douglass North, ambos galardonados con el Premio Nobel de Economía (Acemoglu en 2024 y North en 1993), y la situación actual de Venezuela es profunda, ya que sus teorías sobre el papel de las instituciones en el desarrollo económico ayudan a explicar las causas de la crisis venezolana y ofrecen un marco para entender cómo podría superarse.

Descritas teóricamente antes, las **instituciones extractivas** suenan al reflejo de lo que hemos visto en Venezuela durante décadas: el poder político y económico se ha concentrado en manos de una élite (primero económica y luego política), lo que ha llevado a la explotación de los recursos del país (principalmente el petróleo) sin generar desarrollo sostenible.

En ese sentido, el gobierno venezolano ha debilitado las instituciones inclusivas al centralizar el poder político, erosionar los derechos de propiedad (expropiaciones masivas, control estatal de sectores claves, uso punitivo del órgano impositivo y uso de la justicia a discreción), imitar la participación política mediante la represión y la falta de elecciones libres, mantener un sistema económico dependiente del petróleo, que beneficia a una élite política y militar mientras excluye a la mayoría de la población.

El resultado conocido ha sido un colapso económico, con hiperinflación, pobreza extrema y una crisis humanitaria, lo que confirma la tesis de Acemoglu y Robinson sobre cómo las instituciones extractivas, sumadas a varios otros males, conducen al fracaso económico.

En la misma línea, Douglass North, en su obra *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*⁵, destacó que las instituciones (las reglas formales e informales que rigen la interacción humana) son fundamentales para el desarrollo económico. De acuerdo a North:

- Las instituciones determinan los incentivos económicos y políticos en una sociedad.
- El cambio económico sostenible requiere un cambio institucional, es decir, la transformación de las reglas que rigen la economía y la política.
- Las instituciones informales (como normas culturales y sociales) también juegan un papel clave en el desarrollo.

5 Douglass North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press, 1990.

En Venezuela, las instituciones formales (como el sistema judicial, el parlamento y los organismos reguladores) han sido debilitadas por el poder político –incluso durante años anteriores a la llegada del chavismo–, lo que ha destruido los incentivos para la inversión, la innovación y el crecimiento económico.

Las instituciones informales, como la cultura de dependencia del Estado (heredada del modelo rentista petrolero), también han contribuido al estancamiento económico. Durante décadas, el Estado ha sido visto como el principal proveedor de empleo y bienestar, lo que ha limitado el desarrollo de un sector privado dinámico.

De acuerdo a North, el cambio económico en Venezuela requeriría una transformación institucional profunda, que incluya la reconstrucción de instituciones formales que garanticen el estado de derecho, los derechos de propiedad y la competencia económica, así como un cambio cultural que fomente la iniciativa privada, la innovación y la diversificación económica.

Este proceso, probablemente, no esté exento de retrocesos, North advertía que el cambio institucional es un proceso lento y que los retrocesos son comunes. Incluso si Venezuela logra un cambio político, la transformación económica requerirá tiempo y un compromiso sostenido para construir instituciones inclusivas.

¿Crecimiento o desarrollo económico, a qué aspiran los países?

Robert Solow definió el crecimiento económico como el aumento sostenido de la producción de bienes y servicios de una economía –impulsado por los factores productivos capital y

trabajo–, medido principalmente a través del PIB, y se enfoca en aspectos cuantitativos, como el tamaño de la economía, sin garantizar mejoras en la calidad de vida.

Por otro lado, el desarrollo económico es definido por Amartya Sen o Joseph Stiglitz como un concepto más amplio que implica mejoras en el bienestar de la población, incluyendo aspectos como la educación, la salud, la equidad social y el acceso a servicios básicos, y se mide con indicadores como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) o la distribución del ingreso. La principal diferencia radica en que el crecimiento económico puede ocurrir sin cambios estructurales ni beneficios sociales, mientras que el desarrollo económico busca un progreso sostenible y equitativo que impacte positivamente en la calidad de vida de toda la población. Es decir, no es condición necesaria y suficiente el crecimiento económico para garantizar el desarrollo, pero para que ocurra el desarrollo, si debe existir crecimiento económico.

Alineado con este debate, una frase con la que suelo concluir una de mis primeras clases del programa a estudiantes de segundo semestre de economía es con esta de Robert F. Kennedy en la que decía:

Durante demasiado tiempo, pareciera que hemos renunciado a la excelencia personal y a los valores comunitarios en aras de la mera acumulación de bienes materiales. Nuestro Producto Nacional Bruto, hoy, supera los 800 mil millones de dólares al año, pero ese Producto Nacional Bruto –si juzgamos a los Estados Unidos de América por eso– incluye la contaminación del aire, la publicidad de cigarrillos y las ambulancias para limpiar nuestras carreteras de la carnicería. Incluye las cerraduras especiales para nuestras puertas y las cárceles para quienes las rompen. Incluye

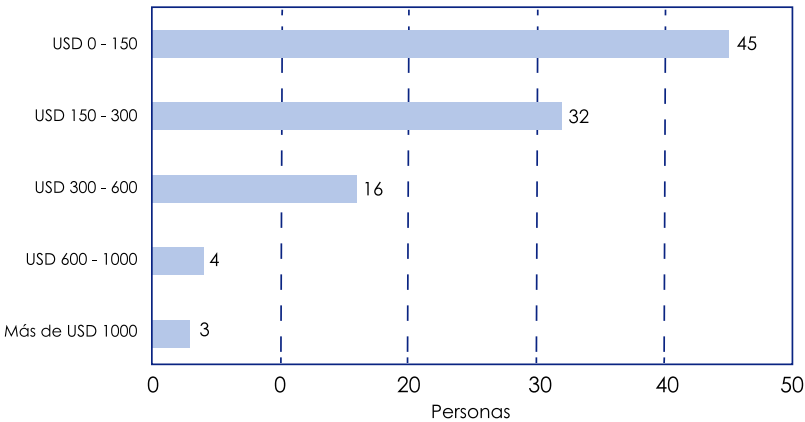
la destrucción de los bosques de secuoyas y la pérdida de nuestra maravilla natural en una expansión caótica. Incluye el napalm y las ojivas nucleares y los vehículos blindados para que la policía combata los disturbios en nuestras ciudades.

Sin embargo, el producto nacional bruto no incluye la salud de nuestros niños, la calidad de su educación ni la alegría de sus juegos. No incluye la belleza de nuestra poesía ni la fortaleza de nuestros matrimonios, la inteligencia de nuestro debate público ni la integridad de nuestros funcionarios públicos. No mide ni nuestro ingenio ni nuestro coraje, ni nuestra sabiduría ni nuestro conocimiento, ni nuestra compasión ni nuestra devoción a nuestro país; mide todo, en definitiva, excepto aquello que hace que la vida valga la pena. Y puede decirnos todo sobre Estados Unidos, excepto por qué estamos orgullosos de ser estadounidenses⁶.

La “trampa de las instituciones extractivas”

Tanto Acemoglu como North coinciden en que los países con instituciones extractivas enfrentan una “trampa” difícil de superar, ya que las élites que se benefician de estas instituciones tienen pocos incentivos para cambiarlas. En el caso de Venezuela, los gobierno de las últimas décadas y sus aliados han construido un sistema extractivo que les permite mantener el poder político y económico, incluso a costa del bienestar de la mayoría de la población, como refleja el hecho que para julio de 2024, 7% de la población ganaba ingresos mensuales por debajo de los USD 300; en contraste con apenas un 3,0% que gana más de USD 1.000.

6 Robert F. Kennedy, Discurso en la Universidad de Kansas, 18 de marzo de 1968.



Fuente: Ecoanalítica

En ese sentido, la ausencia de un marco institucional inclusivo dificulta la transformación que el país necesita para mejorar significativamente las perspectivas.

La relación entre instituciones políticas y económicas

De acuerdo con Acemoglu y Robinson en *Why Nations Fail*, las instituciones políticas y económicas están profundamente interrelacionadas y determinan el éxito o el fracaso de las naciones.

Las instituciones políticas inclusivas, que promueven la participación amplia y garantizan derechos políticos, tienden a generar instituciones económicas inclusivas, las cuales fomentan la innovación, la inversión y el crecimiento económico al proteger los derechos de propiedad y ofrecer igualdad de oportunidades. Por el contrario, las instituciones políticas extractivas, que concentran el poder en manos de una élite, suelen dar lugar a instituciones económicas extractivas, diseñadas para beneficiar a unos pocos a costa de la mayoría, lo que limita el desarrollo económico sostenible. En esencia, las instituciones políticas moldean las econó-

micas, y estas últimas refuerzan las primeras, creando un círculo virtuoso o vicioso según su naturaleza.

En ese sentido, los autores destacan que las instituciones políticas inclusivas son un requisito inicial para el desarrollo de instituciones económicas inclusivas. Las instituciones políticas inclusivas distribuyen el poder de manera más equitativa, limitan el abuso de poder y permiten la creación de políticas económicas que beneficien a la mayoría.

Por el contrario, las instituciones políticas extractivas concentran el poder en manos de una élite, lo que perpetúa las instituciones económicas extractivas.

Las perspectivas del 2025: atadas al embudo institucional.

Llevando la discusión al momento en Venezuela, las perspectivas económicas de 2025 están marcadas por el marcado deterioro político e institucional -tras las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024-, y las consecuencias que tengan en la política de sanciones de la administración Trump en EE.UU. Una muestra clara de la incidencia del marco institucional en el crecimiento del país, y nuestros escenarios esencialmente se enmarcan en ello.

En caso de que sean eliminadas las licencias otorgadas a empresas como Chevron y Reliance –juntas representan más del 30% de las exportaciones petroleras–, la visión del 2025 se deteriorará significativamente. Estas licencias han sido claves para mantener cierta estabilidad en la producción petrolera y en los ingresos del país, por lo que su eliminación tendría un impacto profundo en la economía venezolana.

La licencia de Chevron, que participa en la producción a través de cuatro empresas mixtas, y Reliance, que participa en la comercialización de crudo venezolano en el sudeste asiático –que es cerca del 50% de la demanda de crudo venezolano–, han permitido a Venezuela mantener una producción petrolera limitada pero estable, ya que han mejorado las condiciones de la infraestructura crítica en la explotación, financiamiento y acceso a mercados internacionales. Sin ellas, Venezuela tendría mayores dificultades para colocar su petróleo en el mercado internacional debido a las sanciones.

Sin estas licencias, la producción podría caer gradualmente entre 20 y 30% que dejaría el nivel de producción promedio de 2025 en uno 700.000 barriles, dado que PDVSA no cuenta en la actualidad con los recursos técnicos ni financieros para sostener los niveles actuales de extracción y refinación.

Además, esto podría llevar a un aumento en las exportaciones clandestinas –con tácticas viejas como apagar los GPS de las embarcaciones, cambios de la carga en altamar o la utilización de banderas distintas a la venezolana– o a descuentos aún mayores en el precio del crudo, reduciendo los ingresos por barril. Así mismo, la falta de inversión extranjera y de mantenimiento en la infraestructura petrolera se agravaría, acelerando el colapso del sector. Lo que tendría un impacto a largo plazo, incluso si las sanciones se flexibilizan en el mediano plazo.

La eliminación de las licencias reduciría significativamente los ingresos en dólares del gobierno, lo que limitaría nuevamente su capacidad para importar bienes esenciales, financiar programas sociales –ampliando la desigualdad– y estabilizar el tipo de cambio. El recrudecimiento de la crisis económica y social podría

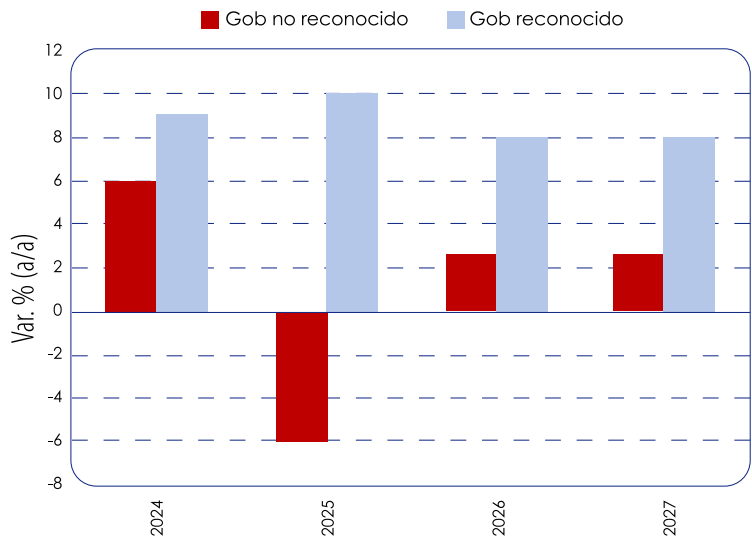
impulsar una nueva ola migratoria, ya que según estudios de Delphos el 20% de la población actual tiene deseos de irse si no ocurre un cambio político en el corto plazo.

Esto traería como consecuencia una mayor dependencia del trabajo informal y las remesas. Con menos ingresos petroleros, las remesas y la economía informal se convertirían en las principales fuentes de acceso a divisas para el país, y de sustento para las familias.

En esa línea el gobierno tendría dificultades para mantener la estabilidad del tipo de cambio, lo que nos permite anticipar en nuestro escenario base que veremos una mayor devaluación del bolívar -tuvo su menor devaluación en una década en 2024 con una variación de 44%- y un aumento de la inflación respecto al cierre de 2024 -48% interanual-. La dolarización informal -que es probable que el gobierno vuelva a facilitarla retirando o disminuyendo el Impuestos a las Grandes Transacciones en divisas, autorizando las transferencias en dólares y reduciendo los costos de retiro de efectivo en la banca- seguiría beneficiando a una minoría con acceso a divisas, mientras que la mayoría de la población, que depende del bolívar, enfrentaría mayores dificultades.

La economía venezolana, que ha mostrado signos de estabilización en algunos sectores gracias a la dolarización y la apertura parcial, podría volver a contraerse tras acumular un crecimiento de 19% en el período 2021-2024. Una recuperación que es débil en términos de las condiciones y pequeña en términos matemáticos: apenas compensa la caída de 77% de la economía entre 2014 y 2020, estos años de bajo crecimiento todavía implican que la economía es 72,6% menos de lo que era en 2013.

Dicho esto, sin un acuerdo que avance hacia la reinstitucionalización del país, prevemos una caída de al menos 5% del PIB en 2025, especialmente si el sector petrolero, que se mantiene siendo el principal motor de la economía, se ve gravemente afectado.



Fuente: Ecoanalítica

En los años siguientes la economía, si se mantiene el bajo reconocimiento al gobierno, la economía seguiría en ese ciclo de “estabilidad en el foso” como se ha mencionado en otras oportunidades, en referencia a que la economía no ha logrado resolver sus problemas institucionales y fallas estructurales -como bajo funcionamiento de servicios básicos, sanciones internacionales, ausencia de financiamiento interno y externo, bajo poder de compra de los consumidores, entre otros-, por lo que el mejor resultado es estabilizarse o mantenerse con niveles de crecimiento bajos dadas las limitaciones para avanzar en una senda de crecimiento sostenido, de base amplia y cercano a los dos dígitos -como debería crecer

una economía que se contrajo a una cuarta parte en la década pasada-.

La situación económica de Venezuela en 2025 refleja con claridad cómo el deterioro institucional puede atar el progreso de una nación. Las instituciones inclusivas y funcionales son el pilar de cualquier recuperación sostenible, y sin ellas, el país enfrenta un ciclo de bajo crecimiento, donde los avances son frágiles y las caídas, profundas.

Sin embargo, incluso en este panorama sombrío, existe una lección poderosa: el cambio estructural y la reinstitucionalización no son solo necesarios, sino posibles. La historia económica global demuestra que las naciones que logran reconstruir sus instituciones, fomentar la confianza y abrirse al mundo pueden revertir décadas de crisis. Venezuela tiene el potencial de salir de este embudo institucional, pero requiere decisiones valientes, acuerdos políticos y un compromiso genuino con el bienestar de su gente.

El futuro no está escrito. Si bien los desafíos son inmensos, también lo es la capacidad de los venezolanos para resistir, adaptarse y construir un camino hacia la prosperidad. La clave está en reconocer que el progreso no vendrá de medidas temporales, sino de un cambio profundo, que aunque gradual, permita a la economía y a la sociedad florecer nuevamente.

Crisis económica y el colapso del acervo de capital humano venezolano

Omar Zambrano

Introducción

La noción de que la generación y acumulación de capital humano es un proceso imprescindible para el crecimiento económico es uno de los consensos más extendidos en la literatura económica. Se sabe que el acervo de capital humano de un país permite ampliar la base factorial de la producción y aumentar su productividad, lo que se traduce en un mayor crecimiento económico y riqueza. Además, la acumulación de capital humano es el motor de la innovación, permite la adaptación a nuevas tecnologías, reduce la desigualdad y mejora las condiciones de vida de las personas¹.

Entre 2013 y finales de 2021, Venezuela experimentó uno de los peores colapsos de crecimiento de los que se tenga registro en la historia económica contemporánea. En ese lapso, el país perdió

1 Robert J. Barro, "Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study", Technical Report w5698, *National Bureau of Economic Research*, Cambridge, 1996, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w5698/w5698.pdf

más de 75% de su Producto Interno Bruto, lo cual representa uno de los episodios de contracción económica más profundos del cual se tenga conocimiento en tiempos de paz². Las consecuencias de ese episodio en términos de la evolución de los indicadores tradicionales de bienestar humano han sido profundas y persistentes. De hecho, la recuperación parcial en los niveles de actividad económica ocurrida desde 2021 hasta hoy, ha sido tan leve en magnitud, tan limitada en términos sectoriales, tan circunscrita territorialmente, y tan desigual en términos económicos, que ha resultado insuficiente para mejorar las condiciones de vida de amplias porciones de la población venezolana que sigue enfrentando niveles de precariedad extrema en sus condiciones materiales de vida.

Este artículo resume los principales resultados de la investigación titulada “Colapso económico y acervo de capital humano: impacto de la crisis económica de Venezuela sobre la cantidad y nivel educativo de la fuerza laboral”³, que será publicada próximamente por el Banco Interamericano de Desarrollo. En este trabajo se cuantifica por primera vez el efecto que tuvo el colapso experimentado por la economía venezolana sobre el proceso de acumulación de capital humano del país.

-
- 2 Por ejemplo, de acuerdo con la *Total Economy Database*, durante la Gran Recesión a partir de 1929, EE.UU. perdió aproximadamente 30% de su PIB; asimismo, durante la transición postsoviética entre 1991 y 1999, Rusia perdió aproximadamente 40% de su PIB; a su vez, durante la crisis hiperinflacionaria entre 2000 y 2008, Zimbabwe perdió un estimado de 50% de su PIB.
 - 3 Omar Zambrano, Hugo Hernández, Albani Granado, Gabriel Quiroz, y Jean Pierre Oliveros. *Colapso económico y acervo de capital humano: impacto de la crisis económica de Venezuela sobre la cantidad y nivel educativo de la fuerza laboral*. Banco Interamericano de Desarrollo. 2024, (por publicar).

Se sabe que en los últimos años, la cantidad y disponibilidad de capital humano en Venezuela ha experimentado una contracción notoria como consecuencia de los efectos concomitantes de dos factores: (i) Un ajuste demográfico producto de una ola migratoria de inmensas proporciones, que ha resultado en la salida del país de cerca de una quinta parte de la población⁴; y, (ii) la profunda contracción en el valor de los salarios reales, que ha reducido los incentivos para participar en el mercado laboral y para invertir en mayor escolaridad por parte de los más jóvenes, con un impacto desproporcionadamente mayor sobre las mujeres venezolanas⁵. Aunque en teoría se sabe que ambos factores han de haber tenido un efecto sobre la cantidad y disponibilidad del capital humano en Venezuela, poco se conoce sobre la magnitud cuantificable y profundidad de dichos efectos⁶.

4 R4V, Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. “Refugiados y migrantes de Venezuela”, 2024, <https://www.r4v.info/es/document/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-noviembre-3>

5 De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Uso del Tiempo 2023, solo el 41,5% de las mujeres en edad de trabajo participaban en el mercado laboral, una de las tasas de actividad más bajas de la región, Zarah Dominguez, Albani Granado, Ana Ibarra, Anaís López, Claudia Piras, Omar Zambrano, *Trabajo no remunerado y desigualdades de género en Venezuela*, Banco Interamericano de Desarrollo, 2024, <https://doi.org/10.18235/0013230>

Asimismo, se estima que un tercio (32,9%) de los jóvenes venezolanos entre 15 y 24 años, equivalente a 1,8 millones de persona, no estudian ni trabajan, es decir, están fuera de cualquier proceso de acumulación o mejora de su capital humano. ANOVA Policy Research, *Oportunidades perdidas: Tendencias en la movilidad intergeneracional en educación en Venezuela*, 2024, <https://thinkanova.org/2024/12/18/oportunidades-perdidas-tendencias-en-la-movilidad-intergeneracional-en-educacion-en-venezuela/>.

6 Siguiendo los resultados en Zambrano et al, *Colapso económico y acervo de capital humano...*, este artículo reseña el diagnóstico de la evolución de la oferta de trabajo de los venezolanos en los años recientes, utilizando

La crisis y el período de colapso del capital humano en Venezuela (2015-2021)

Como se mencionó, durante la crisis económica 2013-2021, el cambio en la cantidad y composición de la oferta laboral venezolana estuvo determinado por el efecto conjunto de dos mecanismos: (1) el ajuste demográfico producto de la migración; y, (2) la caída abrupta del salario real y su impacto en el mercado laboral. La evidencia analizada en Zambrano⁷ permite cuantificar el impacto de ambos efectos tanto sobre la cantidad de trabajadores disponibles, así como sobre la composición de la fuerza laboral

la evidencia proveniente de los microdatos de las encuestas de hogares disponibles (EHM-INE y ENCOVI), siguiendo para ello la metodología incluida por Sartorio (Luca Sartorio, *An Employment Diagnostic Approach to Address Labor Market Stagnation in Argentina*, Harvard University, 2022, <https://www.consortio.edu.pe/umbral/wp-content/uploads/2023/07/An-Employment-Diagnostic-Approach-to-Address-Labor-Market-Stagnation-in-Arentina.pdf>) y Patrinos (Harry Patrinos, *Estimating the return to schooling using the Mincer equation*. IZA World of Labor, 2016, <https://wol.iza.org/uploads/articles/278/pdfs/estimating-return-to-schooling-using-mincer-equation.pdf>); posteriormente se presenta una estimación de los costos de la pérdida de capital humano en términos del crecimiento económico, siguiendo para ello a Barro (Robert Barro, *Notes on Growth Accounting*, National Bureau of Economic Research Working, Paper Series N° 6654, Julio 1998, <https://www.nber.org/papers/w6654.pdf>); para finalmente proponer un marco de comparación internacional contrafactual siguiendo a Abadie y Gardeazabal (Alberto Abadie, Javier Gardeazabal, "The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country", *The American Economic Review*, American Economic Association, 2003, 93(1):113-132.

- 7 Omar Zambrano, Hugo Hernández, Albani Granado, Gabriel Quiroz, y Jean Pierre Oliveros, *Colapso económico y acervo de capital humano: impacto de la crisis económica de Venezuela sobre la cantidad y nivel educativo de la fuerza laboral*. Banco Interamericano de Desarrollo, 2024, (por publicar).

por nivel educativo (primaria completa o menor, secundaria completa y superior completa).

A continuación la secuencia de los **ocho impactos fundamentales** observados en el mercado laboral entre 2015 y 2021, período referido como el de *colapso del capital humano venezolano*:

1. *La crisis económica degradó los incentivos para participar en el mercado laboral y acumular mayor educación*

Detrás de la caída en la Población Económicamente Activa (PEA)⁸, está el colapso del valor real de los salarios, resultado de, entre otros factores, la crisis hiperinflacionaria de 2017, que fue el factor principal que distorsionó los incentivos para la participación en el mercado laboral. De hecho, se estima que en la década que va de 2012 a 2021, los **ingresos laborales totales cayeron 86,1⁰% en términos reales**. Esta caída repercutió también en la percepción de cuán rentable es la educación, afectando las decisiones individuales de formación de capital humano. Se estima que entre 2010 y 2021, los retornos marginales a la educación⁹ disminuyeron progresivamente. De hecho, en 2010, un año adicional de educación se

8 La Población Económicamente Activa (PEA) se define como el conjunto de personas dentro de una población que tienen la edad mínima legal para trabajar y que, durante un período de referencia específico, están empleadas (realizando actividades remuneradas o productivas) o desempleadas (buscando activamente trabajo).

9 Los retornos marginales de la educación se refieren al incremento adicional en los ingresos laborales que se obtiene al invertir en un año adicional de educación o en un nivel educativo superior. Se calculan a través de las llamadas “ecuaciones de Mincer”, que establece una relación funcional entre los años de educación, la experiencia laboral y los ingresos que puede ser estimada empíricamente.

asociaba a un aumento del ingreso real del 3,7%, mientras que en 2021 este porcentaje se reduce a 1,7%, una **reducción de 54% en el rendimiento de la inversión en capital humano educativo**.

2. Venezuela se quedó sin 4,1 millones de personas en edad de trabajar

Como resultado del abrupto deterioro en los ingresos laborales en el período de estudio, en particular a partir de 2014, millones de venezolanos/as cruzaron las fronteras en lo que constituye una de las mayores crisis migratorias contemporáneas¹⁰. Como consecuencia de esta inmensa ola migratoria, la población de Venezuela cayó abruptamente a 28.352.075 de personas en 2021, cifra incluso por debajo de la registrada oficialmente en el último censo de población y vivienda de 2010¹¹.

La caída en la población de Venezuela tuvo su correlato en el colapso de la población en edad de trabajar (PET)¹², que es el agregado demográfico más importante en términos económicos y productivos. De hecho, entre 2017 y 2021, la PET se contrajo en 19,8%, una contracción absoluta equivalente a **4,1 millones de personas en edad laboral**. Esta caída estuvo concentrada en los segmentos más jóvenes de 15 a 24 años (-19,7%) y más productivos de 25 a 50 años (-10,4%).

10 La Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), estima en más de 7,8 millones el total venezolanos que han emigrado en la última década.

11 El número de habitantes de 2010 toma como referencia el calculado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las cifras subsiguientes corresponden a estimaciones del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU.

12 La población en edad de trabajar está comprendida por los habitantes entre 15 a 64 años

*3. Venezuela perdió un tercio de la población
que participaba en el mercado laboral*

Paralelamente a la caída absoluta en la cantidad de personas en edad de trabajar, el colapso económico de la segunda mitad de la última década, caracterizado por el cierre de miles de empresas, en el marco de una crisis hiperinflacionaria, generó una contracción simultánea en la demanda de trabajo y la caída abrupta de los salarios reales promedio. Esta caída de los salarios reales generó, entre otros efectos, un marcado desestímulo para la participación en el mercado laboral. Entre 2015 y 2021, la tasa de actividad se redujo en 11,6 puntos porcentuales, esto es **una caída de 4,4 millones de personas, un tercio de la población económicamente activa (PEA)**. Esta contracción afectó desproporcionadamente a las mujeres y los trabajadores con mayor experiencia laboral.

*4. Parte importante de los trabajadores más calificados
salieron del mercado de trabajo*

La mencionada caída en los salarios reales y la subsecuente caída en los retornos económicos de la educación tuvo como consecuencia una disminución en la disponibilidad de los trabajadores más calificados a partir de 2015. Se estima que entre 2015 y 2021 el número de trabajadores activos con educación superior cayó 27,4%, mientras que el total de trabajadores activos con educación secundaria cayó 29,0%. En agregado, en 2021 **el número de trabajadores activos con educación secundaria, técnica o universitaria completa cayó en 2,0 millones de personas con respecto a 2015**. Los cambios en el perfil educativo de la fuerza laboral venezolana, en cuanto a niveles educativos agregados, tuvo una incidencia desproporcionadamente mayor en las mujeres.

5. *Venezuela perdió parte importante de sus avances educativos acumulados*

La contracción estimada en la población económicamente activa, junto con la fuerte concentración en segmentos relativamente más calificados y productivos, magnificaron los efectos agregados sobre el acervo de educación acumulado. De hecho, medido por la variable *masa educativa*¹³, se estima que los años totales de educación incorporados en la PEA se reducen en un 39,8% entre 2015 y 2021, lo cual equivale a **55,3 millones de años de educación perdidos o desincorporados del esfuerzo productivo**. En promedio, se estima que el número de años de educación promedio de los trabajadores activos venezolanos pasó de 11,1 años en 2015 a 9,5 años en 2021, **una reducción de 1,1 el número de años de escolaridad promedio**.

6. *Venezuela dilapidó una parte importante de sus trabajadores con mayor experiencia*

La experiencia laboral constituye un importante entorno de aprendizaje donde se adquieren la mayoría de los conocimientos y habilidades específicas. Mediante la aproximación de Mincer¹⁴ (1974) que toma en cuenta la edad del individuo, los años de educación básica y secundaria, y la edad en que este ingresa al sis-

13 Se define como la sumatoria agregada de años de educación de toda la población económicamente activa. Se obtiene agregando el número de trabajadores incorporados a la PEA por la cantidad estimada de años de educación de cada trabajador

14 Jacob Mincer, *Schooling, Experience, and Earnings*, NBER, National Bureau of Economic Research, 1974, <https://www.nber.org/books-and-chapters/schooling-experience-and-earnings>

tema educativo¹⁵, se estima que durante el período de colapso del acervo de capital humano en Venezuela (2015-2021), **el número de años de experiencia laboral potencial acumulados en la PEA cayó en 34%, equivalente a 97,8 millones de años.**

7. Las pérdidas de capital humano contribuyeron al colapso de crecimiento económico

La erosión substantiva en la disponibilidad y nivel de la fuerza laboral venezolana mediante los canales descritos tuvo impactos directos sobre las capacidades productivas del país. Se estima que, en el marco de un ejercicio de contabilidad del crecimiento económico¹⁶, entre 2013 y 2021, pero particularmente a partir de 2015, el país sufrió un abrupto colapso factorial en ambos stocks de capital, físico y humano. **Entre 2015 y 2021, la merma en el capital humano fue responsable del 12% de la contracción total del PIB en este lapso, un impacto negativo de 2,7 puntos porcentuales de crecimiento al año.**

15 En el caso de Venezuela, la variable resultante se calcula de la siguiente manera: Edad en años - educación primaria (6 años) - educación secundaria (5 años) - edad de inicio de educación formal (5 años).

16 En Zambrano et al, *Colapso económico y acervo de capital humano...* se formula un ejercicio de contabilidad de crecimiento siguiendo a Barro (Robert Barro, *Notes on Growth Accounting...*), desglosando el stock de capital humano por nivel educativo como en Jorgenson y Griliches (Dale Jorgenson, Zvi Griliches, "The Explanation of Productivity Change", *The Review of Economic Studies*, 1967, Oxford University Press, 34(3):249-283. Así como en: Dale Jorgenson, Frank Gollop, Barbara Fraumeni, *Productivity and U.S. Economic Growth*, University of Southern Maine, 1987, <https://digitalcommons.usm.maine.edu/facbooks/114/>

8. *Las pérdidas de capital humano entre 2015 y 2021 son aún mayores si se analizan desde una perspectiva comparativa internacional*

Un marco de estimación contrafactual utilizando la metodología de control sintético (MCS) propuesta por Abadie y Gardeazabal (2003), concluye que, en 2021 **la población económicamente activa (PEA) de Venezuela era 6,0 millones de personas menor a lo que hubiera sido de acuerdo con la trayectoria estimada del escenario contrafactual**. Esta divergencia, que indica que el tamaño de la PEA es 36% menor a la que hubiera sido en un escenario “sin colapso de capital humano”, puede ser interpretada como una aproximación al efecto acumulativo que la crisis socioeconómica y migratoria experimentada en el país ha tenido sobre el acervo de capital humano venezolano.

Conclusiones e implicaciones de política

Entre 2013 y 2021, Venezuela perdió más de 75% de su Producto Interno Bruto en una de las depresiones económicas más profundas y duraderas en la historia económica moderna. Aunque la actividad económica entró en recesión a partir de 2013, fue a partir de 2015 que el país experimentó los efectos más agudos del colapso económico, con impactos concurrentes provenientes de la destrucción del tejido productivo, la crisis hiperinflacionaria y la paralización de servicios públicos y sociales básicos.

El colapso del valor de los salarios reales a partir de 2015 no solo indujo una crisis profunda en las condiciones de vida de los venezolanos, si no que distorsionó por completo los incentivos a la escolarización y a la participación laboral. Ambos mecanismos afectaron profundamente el proceso de acumulación de capital

humano en Venezuela en los últimos años, pero hasta ahora no se había cuantificado la magnitud de los impactos específicos sobre el mercado de trabajo.

La evidencia indica que el período 2015-2021, que hemos denominado como de *colapso del capital humano*, se caracterizó por una severa contracción en la cantidad y un cambio en la composición del acervo de trabajadores en Venezuela. Durante ese período, Venezuela experimentó una caída de un tercio en la población económicamente activa, unas 4,4 millones de personas. Se estima que durante el periodo de colapso de capital humano, la población económicamente activa de Venezuela perdió 27,4% de sus profesionales universitarios, 39,8% de los años de escolaridad total acumulados; 34,0% de los años de experiencia laboral total acumulados, y 1,1 años de escolaridad promedio.

El declive productivo y educativo descrito en este artículo tiene implicaciones profundas y duraderas para las perspectivas de recuperación económica de Venezuela. Tomando en cuenta el hecho de que el colapso de capital humano fue desproporcionadamente mayor para sub-grupos específicos, como las mujeres, los trabajadores en plenitud productiva (de 25 a 50 años) y los trabajadores con mayor grado de escolaridad y experiencia laboral, todo diagnóstico o diseño de políticas que apunte al crecimiento a futuro, deberá tomar en cuenta políticas específicas para estas poblaciones si se quiere relajar la restricción vinculante que significará el capital humano para cualquier proceso sostenido de crecimiento económico.

Una agenda de reformas para el crecimiento sostenido y democrático pasa, necesariamente, por la reconstrucción de las capacidades productivas de los venezolanos, incluyendo la

reconstrucción de su acervo de capital humano. El punto de inicio deberá ser un proceso de estabilización económica que permita una mejora sostenida en el valor de los salarios reales, como única forma de revertir los incentivos perversos en contra de la participación laboral y la acumulación de años de escolaridad formal. Asimismo, la agenda de recuperación y crecimiento sostenido deberá plantearse políticas específicas para el apoyo de la participación laboral femenina, incluyendo la reconstrucción de los elementos de la red de protección social de apoyo a las actividades de cuidado y trabajo no remunerado en el hogar. Deberá también formularse políticas específicas para crear incentivos al retorno de la diáspora, sobre todo de aquellos migrantes en edad más productiva, mayor experiencia laboral y con más años de educación, así como políticas migratorias de apertura y atracción de talento no nacional, como vía alternativa para reconstituir el acervo de capital humano.

Autores

Roberto Casanova

Economista egresado de la Universidad Central de Venezuela. Con estudios de Maestría en Historia de las Américas, en la Universidad Católica Andrés Bello. Es miembro fundador de la Asociación Civil Liderazgo y Visión. Ha sido profesor en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Católica Andrés Bello y en el Instituto de Estudios Superiores de Administración – IESA.

Samuel Díaz

Magíster en Políticas Públicas de la Blavatnik School of Government de la Universidad de Oxford, primer venezolano Chevening/Wiedenfeld-Hoffman Trust Scholar. Egresado del Global Competitiveness Leadership Program de Georgetown University. Licenciado en Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana. Co-fundador y Director General de *Nutriendo El Futuro* organización social enfocada en nutrición, salud, educación y empoderamiento comunitario femenino. Actualmente, Programmes Manager de la organización CHAMOS, organización con presencia en 22 estados y 14 proyectos actualmente en materia de salud, educación y agua, saneamiento e higiene (WASH). También ha trabajado como asesor técnico/estratégico de *Fe y Alegría*, consultor y profesor de políticas públicas y diseño, implementación y gestión de proyectos sociales. Representante de los egresados ante el Consejo Superior de la UNIMET.

Asdrúbal Oliveros

Economista venezolano, actualmente socio y director de la consultora económica Ecoanalítica, una empresa especiali-

zada en consultoría económica y financiera con sede en Caracas. Se graduó como economista en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y posteriormente estudió Programa Avanzado de Gerencia (PAG) del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), en Caracas. También se especializó en valoración y evaluación de empresas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en México.

Jesus Palácios Chacín

Es economista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y de la maestría en Finanzas en el IESA, cuenta con otros estudios en finanzas, es profesor de Macroeconomía en la UCAB e IESA, se ha desempeñado como Economista Senior de *Ecoanalítica* y Consultor corporativo de la mano de Asdrúbal Oliveros.

En los últimos 4 años ha trabajado en proyectos con empresas y organizaciones de distintos sectores como el bancario, telecomunicaciones, agrícola, turístico, automotriz, manufacturero, salud, teconología, y en proyectos para el Banco Interamericano de Desarrollo y CAF. Conferencista en foros en América Latina, articulista para Prodavinci, la revista Business Venezuela de Venamcham, Debates IESA y la revista SIC, y ha participado con colaboraciones en varios textos en la UCAB. En el pasado trabajó como analista de mercados emergentes para un banco de inversión (EMIF Securities, Londres) y en casas de bolsa.

Omar Zambrano

Jefe @ThinkAnova y Prof. UCAB. Harvard MPAID.

Índice

Pensar en modelos políticos y económicos <i>Roberto Casanova</i>	2
De milicos a capos: el narcotráfico como enemigo de la democracia en América Latina <i>Democratización</i>	15
Ayuda Humanitaria en Venezuela: del asistencialismo a la generación de capacidades <i>Samuel Díaz</i>	31
La importancia de la institucionalidad en el desarrollo económico <i>Asdrúbal Oliveros, Jesus Palácios Chacín</i>	47
Crisis económica y el colapso del acervo de capital humano venezolano <i>Omar Zambrano</i>	62
Autores	74